



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA A-55

INCONFORMIDAD 65/2007
DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO
INDIRECTO 181/2005.
PARTE QUEJOSA: ELENA TREJO
SAUCEDO Y OTROS.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIO: FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL.
SECRETARIA ADMINISTRATIVA: REBECA CEBALLOS FIGUEROA.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día
treinta y uno de octubre de dos mil siete.

Vo. Bo.

Cotejó:

CORTE DE
LA NACION
A. B. L. A.

ACURRIMERO.

Mediante escrito presentado el nueve de marzo
de dos mil cinco, en la Oficialía de Partes del Juzgado Quinto de
Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad
Valles, Elena Trejo Saucedo, José Refugio Paz Muñoz, Silvino
Herrera Bazán y Guadalupe del Carmen Martínez Sánchez, por
sus propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la
Justicia Federal, en los términos siguientes:

**"III.- Autoridades Responsables: --- Como
ordenadoras. --- a).- El Presidente Constitucional
del Municipio de El Naranjo, con domicilio
conocido en la cabecera Municipal de El Naranjo,**

S.L.P. --- Como ejecutoras: ---1).- El Secretario del Ayuntamiento del mismo municipio. --- 2).- El tesorero del mismo municipio. --- Ambos que pueden ser localizados en las instalaciones de la Presidencia Municipal del Municipio de El Naranjo, S.L.P., con domicilio ampliamente conocido. --- IV.- Acto Reclamado. --- La orden de retener infundada e injustificadamente la compensación asignada a los quejosos en carácter de servidores públicos (regidores), sin mediar orden de autoridad competente que ordenen tal acto. --- Bajo protesta de decir verdad manifiesto que los hechos y abstenciones que me constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado son como sigue. --- ANTECEDENTES: 1.- Con fecha 01 de Marzo del presente año, celebramos sesión ordinaria de cabildo, en la cual se trataron diversos asuntos de la administración Pública Municipal, mismos que fueron desahogados conforme al orden del día correspondiente, sesión a la cual fuimos asistentes en nuestro carácter de regidores propietarios del H. Ayuntamiento de El Naranjo, S.L.P. 2.- Al concluir dicha sesión de cabildo, la responsable es decir, el Presidente Municipal Alfredo Ortiz López, de forma sorpresiva manifiesta en dicha sesión en uso de la palabra, le ordena al Secretario del H. Ayuntamiento, que asiente en el acta de cabildo respectiva que no se realizará pago alguno a los aquí quejosos, a partir de esa fecha, si



INCONFORMIDAD 65/2007.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

a partir del día 02 dos de Marzo del presente año, no nos presentábamos a laborar en las instalaciones de la Presidencia Municipal, con un horario de 09:00 A:M a 15:00 P:M, a lo que le expresamos que no tenía facultad para realizar tal acto, manifestándonos la responsable que él era el Presidente Municipal y por tal razón sí lo podía hacer. --- 3.- Posteriormente, con fecha 03 de Marzo del año en curso, nos es presentado por el Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio del Naranjo, el acta de dicha sesión de Cabildo, en el que aparece la orden del Presidente Municipal, así mismo este Secretario del Ayuntamiento le agrega que la orden del presidente Municipal fue avalada por la aquí quejosa GUADALUPE DEL CARMEN MARTÍNEZ SÁNCHEZ, cuestión que es totalmente falso, toda vez que esta regidora fue una de las que mas oposición tuvo contra la actitud arbitraria del Presidente Municipal. --- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PRIMERO.- El sistema jurídico mexicano descansa en un soporte legislativo denominado Constitución General de la República, ordenamiento que constituye un orden supremo, mismo que establece las bases esenciales del funcionar del sistema de gobierno, precisando las figuras y atribuciones limitativas de sus órganos de gobierno, señalando de manera armónica el mecanismo de función de estas, conforme a las disposiciones reglamentarias, es decir, el

ordenamiento legislativo supremo indica clara y expresamente el ámbito competencial de las autoridades cuidando la no invasión de atribuciones de una figura con otra. --- Así también señala las formalidades esenciales de motivación y fundamentación que debe investir todo acto de autoridad en el que, ineludiblemente debe precisarse la competencia conferida por la ley para respaldar tal acto, y que el mismo no es arbitrario, dando desde luego, la oportunidad a la contraparte su garantía de audiencia, para ser oído y en su caso vencido en juicio. --- Por tanto, el acto realizado por la responsable de ordenar la retención de las compensaciones asignadas a los aquí quejosos, dadas por concepto de desempeño del cargo de elección popular conferido, es inmotivado e infundado, en virtud de carecer el Presidente Municipal de la facultad para condicionar a los integrantes del máximo órgano de Gobierno Municipal, el pago de las compensaciones legalmente autorizadas en la Ley del Presupuesto del Egresos del Municipio de el Naranjo S.L.P., para el ejercicio Fiscal vigente. ---

SEGUNDO.- En el estado de San Luis Potosí, conforme a su ley de responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, reglamentaria del Título Décimo Segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano, especifica los servidores Públicos susceptibles de



INCONFORMIDAD 65/2007.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ser sancionado conforme a dicha ley, así mismo **señala las autoridades competentes para aplicar la misma, como se puede apreciar de una simple lectura del numeral 3 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. En las que no se encuentra contemplado como autoridad competente para aplicar dicha Ley a los Presidentes Municipales. --- Así mismo, el capítulo DÉCIMO SEGUNDO de la Constitución Política del Estado, en su artículo 125 señala las bases para aplicar las sanciones en esta materia que son los Procedimientos de responsabilidad Política, Penal y Administrativa de los cuales, no se tiene conocimiento hasta esta fecha de que se nos hubiere instaurado alguno de ello, por parte de autoridad alguna, mucho menos por parte de la responsable ordenadora. --- TERCERO.- De un estudio integral de lo antes expuesto, podemos concluir que no existe disposición jurídica alguna que faculte al Presidente Municipal a realizar actos indebidos de retención de las renumeraciones de los ahora quejosos, ni disposición legal que lo libere de la responsabilidad en que ha incurrido, dado que el acto que se ataca, carece totalmente de motivación y fundamentación. --- Debe destacarse que por parte de los quejosos, no se tiene la obligación de agotar medio alguno para combatir el acto que se le reclama a la responsable, toda vez que el mismo como ya se dijo carece de**



fundamentación y en virtud de que el carácter con que se realiza tal acto que se reclama, no se encuentra en conflicto la administración Pública Municipal, ni el suscrito es afectado como particular, quedando fuera de la hipótesis que señala el numeral 3 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de San Luis Potosí, ya que como se puede apreciar, en el acto que se impugna, no es aplicada la ley de responsabilidades de los Servidores Públicos, precisándose además que este acto constituye un ataque directo a las garantías individuales de los aquí quejosos, independientemente del trastorno Gubernamental que el actuar de la responsable y sus funcionarios municipales, en coalición ocasionan”.

SEGUNDO. Mediante proveído de diez de marzo del mismo año, la titular del referido Juzgado desechó por motivo manifiesto e indudable de improcedencia la demanda de garantías.

Inconforme con esa resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, que declaró fundado el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, mediante ejecutoria de veintiuno de abril de dos mil cinco, dictada en el toca 180/2005, en la que revocó el acuerdo recurrido y ordenó admitir la demanda de amparo.



INCONFORMIDAD 65/2007.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

TERCERO. En acuerdo de veintiocho del mismo abril, la Jefe de Distrito admitió la demanda de garantías y, previos los trámites de ley, dictó sentencia el siete de junio del mismo año, la cual concluyó con el siguiente resolutivo:

"ÚNICO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Elena Trejo Saucedo, José Refugio Paz Muñoz, Silvino Herrera Bazana y Guadalupe del Carmen Martínez Sánchez, contra el acto reclamado a las autoridades responsables, precisado y señaladas en el resultando primero de esta sentencia, por las razones expuestas en el último considerando de la misma".

Las consideraciones en las que se sustentó la resolución anterior en lo conducente, son las siguientes:

...CONSIDERANDO: ... SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 149, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado al Presidente Municipal, Secretario y Tesorero, todos del Ayuntamiento de El Naranjo, San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre; lo anterior, en virtud de que las citadas responsables omitieron rendir su informe justificado, no obstante estar debidamente notificadas para ello, como se acredita a fojas noventa y seis, noventa y siete, y noventa y ocho de autos.--- **TERCERO.-** No se transcriben los

conceptos de violación hechos valer, atento a que dicha transcripción no es legalmente obligatoria y su omisión no afecta las defensas de las partes. --- Al respecto, es aplicable la jurisprudencia VI.2o.J/129, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 599, Tomo VII, Abril de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: --- "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS" (Se considera innecesario transcribir el texto). --- CUARTO.- Del planteamiento de la demanda de garantías, se advierte que fue señalada como acto reclamado, la orden de retención de las compensaciones asignadas a los quejosos, en su carácter de regidores del Ayuntamiento de El Naranjo, San Luis Potosí. --- Ahora bien, no obstante la presunción de certeza del acto reclamado en el considerando anterior, el amparo solicitado debe negarse, atento a que la suscrita no está en aptitud de examinar la inconstitucionalidad de tal acto, toda vez que ante la omisión de las autoridades responsables, Presidente Municipal, Secretario y Tesorero, todos del Ayuntamiento de El Naranjo, San Luis Potosí, de rendir su informe con justificación en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, correspondía a los quejosos la carga de la prueba de los hechos que determinasen su inconstitucionalidad, ya que dicho acto no es violatorio de garantías en sí



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependen de los motivos, datos o pruebas en que se haya apoyado la determinación por la cual se ordena la retención de las compensaciones asignadas a los aquí quejosos como regidores del Ayuntamiento de El Naranjo, San Luis Potosí; entonces, toda vez que los impetrantes del amparo no acreditaron en autos la inconstitucionalidad de dicho acto, no obstante encontrarse obligados a ello, según se dijo ya, y al no obrar entre las constancias de autos, aquella en la que se contenga dicho mandamiento reclamado, se desconocen los fundamentos, razones y motivos que tuvieron las mencionadas responsables, para emitir la orden que se reclama; por lo tanto, por el cual, se reitera, lo que procede, es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. --- Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número P./J. 17/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: --- "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIMA NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO" (Se considera innecesario transcribir el texto). --- Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los

ACUERDO
SALA
NACIONAL
CORTE DE

**artículos 76, 77, 78 y 192, de la Ley de Amparo; se, -
-- RESUELVE:--"**

CUARTO. La parte quejosa interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia antes transcrita y, mediante ejecutoria dictada el veinticinco de agosto de dos mil cinco, en el recurso de revisión 379/2005, el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al que correspondió conocer del asunto, revocó la sentencia recurrida y concedió la protección constitucional de acuerdo con las consideraciones y puntos resolutivos que enseguida se transcriben:

"TERCERO.- Los agravios son esencialmente fundados. - - - Previamente al estudio de los motivos de inconformidad hechos valer y para mejor comprensión de este asunto, cabe destacar que del expediente de amparo se desprende que los hoy recurrentes reclamaron del Presidente, Secretario y Tesorero del Ayuntamiento del municipio El Naranjo, San Luis Potosí, la orden emitida por la primera de dichas autoridades y la ejecución de la misma por parte de las restantes, para que se les retenga el pago de la compensación que tienen asignada en su calidad de regidores de dicha institución. - - - Por otra parte, del contexto de la sentencia impugnada se desprende que la A quo negó a los recurrentes el amparo y protección de la Justicia Federal, señalando que si bien es verdad que las autoridades responsables no



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN

rindieron su informe justificado y, por ende, debe presumirse cierto el acto reclamado en términos de lo dispuesto por el artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de la Materia, sin embargo, correspondía a dichos recurrentes, y no lo hicieron, demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, dado que éste no es violatorio de garantías en sí mismo. - - - Ahora bien, alegan los recurrentes, entre otras cosas, que indebidamente se les negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, porque la A quo debió tomar en cuenta que el Presidente Municipal de El Naranjo, San Luis Potosí, no tiene facultades para ordenar la retención del pago de sus compensaciones, y que en estas condiciones, el acto reclamado por sí mismo es violatorio de garantías individuales. - - - Al respecto, debe decirse que es esencialmente fundado lo alegado por los recurrentes, pues en el caso particular la A quo debió advertir que la conducta positiva que los quejosos atribuyeron al Presidente Municipal de El Naranjo, San Luis Potosí, en un acto que por su simple emisión resulta inconstitucional, en tanto que en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 114, 115, 116, 117 y 121 de Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 12, 41, 42 y 70 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; no se contempla que los Presidentes Municipales

tengan facultades para ordenar la retención del pago de los diversos emolumentos asignados a los regidores de los Ayuntamientos y contrariamente a ello, de dichos preceptos legales se desprende que tanto los Presidentes Municipales, como los regidores, son cargos de elección popular, y que, en todo caso, corresponde al Congreso del Estado la instauración de un procedimiento para determinar la suspensión y revocación del mandato de algún miembro del Ayuntamiento, con la inherente consecuencia de dejar de percibir los emolumentos que tenga asignados, cuando incurran en cualquiera de las diversas causales que en los propios numerales se especifican. - - - Y si bien es verdad que de lo dispuesto por los artículos 1°, fracción III, 2°, fracción 1, 3°, fracción VIII, 70 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, se infiere que dicho ordenamiento es aplicable, entre otros casos, en materia de responsabilidades por faltas administrativas en el Servicio público y respecto de sanciones disciplinarias; que son servidores públicos los que se desempeñen en un cargo de elección popular; que son competentes para aplicar dicho ordenamiento, entre otros, los Ayuntamientos y sus entidades, así como sus órganos de control interno; que tales Ayuntamientos podrán aplicar sanciones administrativas a sus servidores



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

públicos, previo procedimiento seguido por el órgano de control interno o por el Presidente Municipal; sin embargo, en el artículo 75 del aludido ordenamiento, no se contempla como sanción administrativa la retención del pago de los emolumentos que tengan asignados los regidores de los Ayuntamientos. - - Por tanto, si en los conceptos de violación de la demanda de amparo, los hoy recurrentes plantearon una situación evidentemente por sí misma violatoria de garantías individuales, como lo es la retención del pago de las compensaciones que tienen asignadas como regidores del Ayuntamiento del municipio de El Naranjo, San Luis Potosí, dado que el Presidente Municipal carece de facultades para hacerlo, y si dicha autoridad responsable ordenadora omitió rendir su informe justificado, al igual que las ejecutoras, Secretario y Tesorero de la propia institución, es inconcuso que la A quo debió aceptar ciertos los hechos en la forma planteada por los quejosos, sin que éstos tuvieran la obligación de demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado pues, para resolver lo conducente, no era necesario atender a los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado tal acto, pues se insiste, tal acto es por sí mismo violatorio de garantías. - - En apoyo a lo anterior, resulta aplicable la tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación



CORTE DE
LA NACIÓN
SALA
ACUERDOS

publicada en la página 623, del Tomo LVII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: - - - "ACTO RECLAMADO, CUANDO NO CORRESPONDE AL QUEJOSO LA PRUEBA DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL".- (Se considera innecesario transcribir el texto). - - - Asimismo, este órgano jurisdiccional comparte el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en la tesis aislada publicada en la página 402, del Tomo XIV, Noviembre de 1994, Octava Época, del aludido Semanario, que dice: - - - "ACTO RECLAMADO. LA NATURALEZA DE LA VIOLACIÓN ALEGADA NO ES LO QUE DETERMINA SI ES O NO INCONSTITUCIONAL EN SÍ MISMO EL".- - - (Se considera innecesario transcribir el texto). - - - En este orden de ideas, siendo fundados los agravios hechos valer, se impone revocar la sentencia materia de revisión y en su lugar, procede conceder a los hoy recurrentes el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Presidente Municipal del Ayuntamiento de El Naranjo, San Luis Potosí, deje sin efecto la orden que en su caso haya emitido para retener el pago de las compensaciones que tienen asignadas dichos recurrentes, como regidores esa dicha institución. - El amparo concedido se hace extensivo respecto de las autoridades responsables Secretario y Tesorero del propio Ayuntamiento de El Naranjo,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN

San Luis Potosí, toda vez que siendo
inconstitucional el acto reclamado del Presidente

Municipal, también lo son los actos relativos a la
ejecución de dicho mandamiento que se atribuye a
tales autoridades responsables ejecutoras. - - - Por
último, se estima pertinente agregar que para el
debido cumplimiento de esta ejecutoria, en
términos de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley
de Amparo, el restablecimiento de las cosas al
estado que guardaban antes de la violación deberá
tener lugar con independencia de que
efectivamente el acto reclamado se haya emitido o
no, en razón de que, para efectos del juicio de
garantías el actuar inconstitucional del Presidente
Municipal de El Naranjo, San Luis Potosí, sí existió
y trascendió a la esfera jurídica del agraviado, de
donde se sigue que para el debido acatamiento de
la sentencia de amparo, será necesario que la
autoridad responsable revoque el acto
reclamado y los efectos que de él pudieren
derivarse, en la inteligencia de que la declaración
de voluntad que al efecto emita la autoridad para
revocar el acto declarado inconstitucional,
encuentra restringido su alcance al respectivo
juicio de amparo, de tal suerte que tal revocación,
por sí mismo no podrá constituir una presunción
que sirva de sustento a cualquier actuación ajena a
dicho juicio. - - - Lo anterior se sustenta en la tesis
aislada emitida por la Segunda Sala del Máximo



DOS
CORTE DE
LA
SALA
ACORDA

Tribunal del País, publicada en la página 54, del Tomo VIII, Noviembre de 1998, Novena Época, del referido Semanario, que dice: "SENTENCIA DE AMPARO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE REVOCAR EL ACTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL QUE SE TUVO POR CIERTO ANTE LA FALTA DE INFORME JUSTIFICADO Y QUE EN SÍ MISMO ES VIOLATORIO DE GARANTÍAS, CON INDEPENDENCIA DE QUE EFECTIVAMENTE LO HAYA EMITIDO".- (Se considera innecesario transcribir el texto). - - - Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 83, fracción IV, de la Ley de Amparo y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, se resuelve: - - - PRIMERO.- Se revoca la sentencia recurrida. - - - SEGUNDO.- La justicia de la Unión ampara y protege a ELENA TREJO SAUCEDO, JOSÉ REFUGIO PAZ MUÑOZ, SILVINO HERRERA BAZANA Y GUADALUPE DEL CARMEN MARTÍNEZ SÁNCHEZ, en contra de las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, y que aquí se tienen por reproducidos. El amparo se concede para los efectos que se indican en la parte final del considerando tercero de la propia ejecutoria".

QUINTO. Con base en la referida ejecutoria, la Juez de Distrito del conocimiento procedió a requerir a las autoridades



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA FEDERAL

responsables el acatamiento del fallo protector; sin embargo, ante la actitud omisa de éstas, la propia juzgadora federal, sin haber declarado incumplida la sentencia, remitió los autos del juicio de amparo al Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, en turno, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia, mediante proveído de dieciséis de noviembre de dos mil cinco, el cual es del siguiente tenor:

"Ciudad Valles, San Luis Potosí, a dieciséis de noviembre de dos mil cinco. --- Visto el estado que guardan los autos del presente juicio, de los que se advierte que las autoridades responsables Presidente, Secretario y Tesorero, todos del Ayuntamiento de El Naranjo, San Luis Potosí, aún no informan el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente sumario constitucional, no obstante estar debidamente notificadas del proveído de veintiséis de octubre del año en curso, por el cual se les solicitó, por conducto de su superior jerárquico dicho cumplimiento, según se aprecia de las tarjetas acuses de recibo que obran agregadas en autos. --- Atento a lo anterior, y en razón de que las autoridades responsables han sido omisas en dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, es pertinente señalar que por resolución de veinticinco de agosto del año en curso, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el recurso de revisión interpuesto por la

SECRETARÍA DE JUSTICIA
CORTE DE JUSTICIA FEDERAL
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO
SALA DE ACUERDOS

parte quejosa revocó la sentencia emitida en el presente juicio, para conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Presidente Municipal del Ayuntamiento de El Naranjo, San Luis Potosí, deje sin efecto la orden que en su caso haya emitido para retener el pago de las compensaciones que tienen asignadas los quejosos como regidores de esta institución, concesión que se hizo extensiva respecto de las autoridades responsables Secretario y Tesorero del propio Municipio, por razón de su ejecución. --- En cumplimiento a dicha resolución, por oficios presentados ante este Juzgado el ocho y veinte de septiembre del año en curso, las responsables Presidente, Secretario y Tesorero, todos del Ayuntamiento de El Naranjo, San Luis Potosí, manifestaron haber dado cumplimiento al fallo protector, y para tal efecto, exhibieron copia de recibo del oficio 1010/005, así como copia certificada de la nómina de regidores de dicho Municipio correspondiente a la quincena del uno al quince de septiembre de dos mil cinco.--- En atención al contenido de los informes de las responsables, por auto de treinta de septiembre del año en curso, este Juzgado acordó que de las constancias exhibidas por las responsables, no se desprende que los quejosos hayan recibido las compensaciones que le fueron retenidas, lo que evidentemente constituye también materia de los



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

alcances de la protección constitucional que se

otorga a los amparistas, ya que únicamente hay

constancia de que fueron ingresados en la nómina

de la primera quincena del mes y año en curso,

mas no que les hayan sido pagadas la totalidad de

las compensaciones que como regidores del

aludido Ayuntamiento tiene asignadas y que les

fueron retenidas, por lo que mediante oficios 5947-

l, 5948-l y 5949-l, se requirió nuevamente a las

autoridades responsables el cumplimiento al fallo

protector. --- Luego, en cumplimiento a dicho

requerimiento, mediante oficios recibidos el diez de

octubre del año en curso, el Presidente, Secretario

Tesorero del Municipio de El Naranjo, San Luis

Potosí, expresaron que acorde a los informes del

Departamento de Tesorería de dicho Municipio, por

el momento les era financieramente imposible dar

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, razón por

la cual mediante oficios 6142-l, 6142-l y 6143-l, se

requirió de nueva cuenta el citado cumplimiento a

las responsables, por conducto de su superior

jerárquico. --- Con lo anterior, mediante oficios

1102/005, 1103/005 y 1105/2005, de fecha catorce de

octubre del año en curso, las autoridades

responsables Presidente, Secretario y Tesorero,

todos del Ayuntamiento de El Naranjo, San Luis

Potosí, informaron el cumplimiento dado al fallo

protector, argumentando la primera de las

nombradas que giro orden al Secretario de dicho

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SALA IV
ACUERDOS

Ayuntamiento para que instruyera al Tesorero Municipal para que diera cumplimiento; por su parte, el citado Secretario informó que giró oficio al Tesorero para tal efecto; y por último, el referido Tesorero, refirió que a la fecha no es posible dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que la tesorería a su cargo no cuenta con numerario suficiente para tal efecto, y a fin de acreditar su dicho remite copia de la conciliación bancaria, estados de cuenta bancarios y auxiliares de bancos, así como copia certificada de la nómina de regidores de dicho Municipio correspondiente a la quincena del uno al quince de septiembre de dos mil cinco, además agregó que está cumpliendo parcialmente con la ejecutoria, en razón de que los quejosos comenzaron a cobrar sus compensaciones y ya no acudieron a cobrar estando las compensaciones que les corresponde a su disposición en esa Tesorería. --- Por tanto, mediante proveído de veintiséis de octubre de dos mil cinco, la suscrita acordó que las responsables no han dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en razón de que el Presidente Municipal de El Naranjo, San Luis Potosí, únicamente giró oficio al Secretario del Ayuntamiento a fin de que éste, instruyera al Tesorero de dicho Municipio para que realice el pago de las compensaciones que les fueron retenidas a los quejosos, sin embargo, no acreditan con documento alguno que dicha



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

compensaciones hayan sido pagadas a los amparistas, lo que evidentemente constituye también materia de los alcances de la protección constitucional que se otorgó a los amparistas, en la medida en que constituyen los efectos derivados de la orden de retención del pago de las compensaciones referidas que por esta vía se reclamó, razón por la cual en el propio proveído se solicitó una vez más el multicitado cumplimiento a las autoridades responsables, situación que a la fecha no ha acontecido, no obstante que las mencionadas autoridades estén debidamente notificadas de ello, según se aprecia de los acuses de recibo de los oficios 6375-I, 6376-I, 6377-I y 6388-I mismos que fueron recibidos el treinta y uno de octubre del año en curso, que obran a fojas 528 a 530 de autos. --- Ahora bien, y ante la manifestación de imposibilidad expresada por las autoridades responsables para cumplir con la ejecutoria dictada en el presente asunto y a efecto de no retardar indefinidamente el cumplimiento de la misma, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 105, 107 y 111, todos de la ley de Amparo, y además en los puntos Quinto fracción IV, Décimo fracción I, Décimo Quinto y Décimo Sexto del Acuerdo 5/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha veintiuno de junio de dos mil uno, en el que se determina entre otras cosas la competencia de los Tribunales Colegiados de

UNIDOS
CORTE D.
DE JUS.
A SALA
ACUERDO

Circuito para conocer de los incidentes de inejecución de sentencia; remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, en San Luis Potosí, que se encuentre de turno, para que emita el pronunciamiento que en derecho corresponda, sobre la ejecución o inejecución de la sentencia de que se trata. --- Notifíquese; hágase personalmente a los quejosos."

SEXTO. Previo el trámite del incidente de inejecución respectivo, radicado con el número 13/2005, el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito dictó resolución el diecinueve de enero de dos mil seis, en la que declaró legalmente cumplida la sentencia de amparo, en los siguientes términos:

"... II. Los antecedentes del caso a estudio son los siguientes (Se considera innecesario transcribirlos). Ahora bien, acorde con el sentido de la ejecutoria que concedió la Protección Federal, tal como se desprende de su examen por tenerse a la vista, los actos que debería realizar cada uno de los funcionarios públicos señalados como autoridad responsable para con ello restablecer las cosas al estado que guardaban antes de producirse el acto que se estimó violatorio de garantías, restituyendo por lo tanto a los quejosos en el pleno goce de sus garantías individuales, tal como lo ordena el artículo 80 de la Ley de Amparo, serían: a).- El



INCONFORMIDAD 65/2007.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN

Presidente del Ayuntamiento del Municipio de El Naranjo, San Luis Potosí, dejar sin efecto la orden emitida al Secretario del Ayuntamiento y al Tesorero del mismo en la Sesión de Cabildo celebrada el día primero de marzo de dos mil cinco que constituye el acto reclamado en la demanda de garantías por traducirse en una restricción a las garantías individuales de los quejosos por significar la retención de la compensación asignada a los peticionarios de garantías por el desempeño de su cargo como Regidores de dicho Ayuntamiento; b).- El Secretario del Ayuntamiento de que se trata, tendría en su carácter de ejecutora que acatar las órdenes de su Superior jerárquico y a su vez comunicar al Tesorero del propio Ayuntamiento, que por disposición del Presidente Municipal debía dejar sin efecto las aludidas órdenes; y por último el Tesorero Municipal, en su carácter de autoridad señalada como ejecutora acatar las órdenes del Presidente Municipal en el sentido de dejar sin efecto la determinación de dicho funcionario tomada durante la Sesión de Cabildo que se celebró el día primero de marzo y que consistió en ordenar al Secretario del Ayuntamiento que asentara en el acta de Cabildo el que no se realizaría pago alguno a los quejosos a partir del día dos de marzo si no se presentaban a laborar en las instalaciones de la Presidencia Municipal con un horario de 09:00 a.m. a 15:00 p.m.

.--- Por lo tanto, se pone en claro que la ejecutoria de amparo no tiene en sí misma el alcance legal de ordenar y menos obligar a la autoridad municipal señalada como responsable, tanto con el carácter de ordenadora como en su caso ejecutora, el realizar pago alguno a los quejosos por los conceptos de naturaleza laboral que refieren en la demanda de amparo, ya que la falta de dicho pago, en su caso, de existir después de que la autoridad municipal dejó sin efecto el acto reclamado, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de que el mismo se produjera, son cuestiones de legalidad, relativas al cumplimiento de obligaciones laborales, las que evidentemente son ajenas a la potestad constitucional si antes no son resueltas por la autoridad laboral competente.--- Así entonces, debe concluirse en que dando por cierto que acorde a lo informado a la Juez Quinto de Distrito en el Estado, en los respectivos oficios que le fueron dirigidos por el Presidente del Ayuntamiento del Municipio de El Naranjo, San Luis Potosí, el Secretario y el Tesorero del propio Ayuntamiento, tales funcionarios en su calidad de autoridades señaladas como responsables llevaron a cabo en acatamiento a la ejecutoria de amparo los actos que en ellos detallan y que por lo tanto ello es suficiente para considerar por no existir prueba en contrario que lo demerite, que en el caso no existe incumplimiento a la ejecutoria de amparo



INCONFORMIDAD 65/2007.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN

como lo afirman los quejosos y entonces declarar legalmente cumplida en sus términos la Ejecutoria de Amparo pronunciada por este Tribunal Colegiado al resolver el recurso de revisión en materia Administrativa No. 379/2005 relativa al juicio de amparo promovido por Elena Trejo Saucedo y otros."

SÉPTIMO. La parte quejosa interpuso **inconformidad** en contra de la anterior resolución ante el propio Tribunal Colegiado, el que ordenó remitir los autos a este **AUTO** Tribunal, cuyo Presidente, mediante auto de veintisiete de febrero de dos mil seis, la desechó por notoriamente **maliciosa** e improcedente, bajo el argumento de que la propia resolución era definitiva e inapelable.

Dicha determinación fue revocada por esta Segunda Sala, al resolver el recurso de reclamación 87/2006-PL, en sesión de diecinueve de abril de dos mil seis, en la que se consideró errónea la apreciación que sirvió de sustento al auto presidencial desechatorio; lo anterior, en los términos siguientes:

"...Sentado lo anterior, procede ahora abordar lo relativo a las hipótesis de procedencia de la inconformidad prevista en el párrafo tercero del artículo 105 de la Ley de Amparo, por lo que para una mejor comprensión se transcribe el texto respectivo:--- "Artículo 105.- (Se considera innecesaria su transcripción).--- De igual forma, el criterio

jurisprudencial transcrito en párrafos precedentes, que trata sobre los principios que rigen el cumplimiento de las sentencias de amparo, también describe los lineamientos relativos a la inconformidad a que se refiere la porción normativa citada.--- En ese contexto, debe decirse que si ante las diversas gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente para lograr el cumplimiento de una sentencia concesoria de amparo, la autoridad o autoridades responsables comunican que acataron la sentencia, el Juez de Distrito, el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán, en principio, dar vista al quejoso en relación con esa manifestación de cumplimiento para que exprese lo que a sus intereses convenga; posteriormente, dictarán un acuerdo en el que resolverán, con base en las manifestaciones del quejoso (si las hubo) y de las constancias de autos, si se dio o no el cumplimiento al fallo protector.--- Es precisamente contra ese auto o determinación emitida por la autoridad que haya conocido del juicio de amparo (juez de Distrito en amparo indirecto; o, Tribunal Colegiado de Circuito en amparo directo), en la que declaran que está cumplida la ejecutoria de amparo, que la Ley de Amparo prevé como medio de impugnación a favor del quejoso, precisamente, la inconformidad (párrafo tercero del artículo 105).--



INCONFORMIDAD 65/2007.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN

- Ahora bien, el órgano que la propia ley señala para conocer de ese medio de defensa (inconformidad) es la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, en el Acuerdo General Plenario 5/2001, se delegó esa atribución a los Tribunales Colegiados de Circuito tratándose de las inconformidades que se promuevan contra la determinación de cumplimiento emitida por un Juzgado de Distrito. Esto es, sólo en dicho supuesto es inimpugnable la resolución del Tribunal Colegiado que declara infundada la inconformidad, aunque tratándose de la determinación pronunciada, en su caso, por un Tribunal Colegiado de Circuito en amparo directo, este Alto Tribunal conserva su competencia originaria.--- De los argumentos expuestos con anterioridad respecto de los aspectos de procedencia de los incidentes de inejecución de sentencia y las inconformidades previstas en el párrafo tercero del artículo 105 de la Ley de Amparo, en relación con el análisis integral de los agravios formulados por el recurrente en los que aduce, fundamentalmente, que no debió desecharse su inconformidad pues dicho medio de impugnación lo interpuso contra la resolución que declaró cumplida la ejecutoria de amparo, es de concluirse que fue incorrecta la determinación adoptada en el auto presidencial recurrido, puesto que en este proveído se declaró la notoria

improcedencia del medio de impugnación propuesto, bajo un examen preliminar, sin tomar en cuenta los antecedentes del asunto y las cuestiones planteadas que, en todo caso, serían materia de análisis al resolverse el fondo del asunto en el procedimiento respectivo, no al valorarse para el trámite o no de la inconformidad.--

- Se estima lo anterior, en virtud de que en el acuerdo impugnado la hipótesis de la que partió la ahora recurrente para promover su inconformidad fue que a través de la resolución del órgano colegiado respectivo declaró cumplida la ejecutoria dictada en un juicio de amparo indirecto, en el que fungió como quejosa (independientemente del órgano y el procedimiento en el que se hizo ese pronunciamiento, porque esto sería materia de estudio del fondo de la inconformidad).--- En ~~el~~ ^{este} sentido, en el proveído presidencial recurrido no se analizó en su contexto el medio de impugnación que se estaba promoviendo, pues sólo se tomó en cuenta la naturaleza de la resolución materia de oposición, pero se pasó por alto que a través de dicha resolución el Tribunal Colegiado no declaró infundada una inconformidad en contra de una resolución del Juez de Distrito, sino que directamente declaró cumplida una sentencia de amparo lo que al menos, en forma preliminar, haría procedente la admisión de la inconformidad para que ésta sea analizada por la Suprema Corte de



INCONFORMIDAD 65/2007.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN*Justicia y se traten las particularidades del caso*

concreto.--- No es óbice a lo anterior, que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación haya señalado que el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultado para determinar la notoria improcedencia de los asuntos sometidos a su consideración, como podría suceder con las inconformidades que no cumplieran con los requisitos que prevé el artículo 105 de la ley de la materia, como son el que se promueva por la parte interesada, dentro del plazo legal y contra la resolución por virtud de la cual se declara cumplida la ejecutoria respectiva; esto es así, ya que fue precisamente con base en el requisito señalado en último término (resolución que declara cumplida la sentencia) que la parte quejosa planteó su inconformidad, situación que no hace notoria la improcedencia del medio de impugnación promovido.--- Tiene aplicación al caso concreto, en sentido contrario, la tesis número P. CVI/98, del Pleno de este Alto Tribunal, que informa lo siguiente: "INCONFORMIDAD. SU NOTORIA IMPROCEDENCIA PUEDE DETERMINARSE POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA." (Se considera innecesario transcribir su texto).--- Como consecuencia de la conclusión alcanzada, se revoca el proveído presidencial impugnado, por lo que deberán devolverse los autos al Presidente de la Suprema Corte de Justicia

TE DI
LACION
SAL
TUEROS

de la Nación para que admita la inconformidad interpuesta, salvo que haya otra razón que lo impida.”

OCTAVO. Con base en esa resolución, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la inconformidad, a la que le correspondió el número 180/2006, y se declaró fundada en sesión de diez de julio siguiente, con base en que el Tribunal Colegiado del conocimiento había incumplido con su obligación de dar vista a la parte quejosa con los informes remitidos por las autoridades responsables sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por lo que se ordenó la devolución de los autos a efecto de que se subsanara dicha violación.

La ejecutoria de referencia dice en lo conducente:

“...Ahora bien, superados los aspectos de procedencia de la inconformidad que ahora se resuelve, procede establecer ahora los motivos por los cuales se estima que la misma es fundada.--- En ese tenor, debe recordarse que de los antecedentes del asunto se desprende que el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito en el incidente de inejecución de sentencia planteado por la parte quejosa, dictó su resolución en la que consideró que con base en los efectos de la ejecutoria y de los actos comunicados por las autoridades responsables en acatamiento a ella, debía declararse legalmente cumplida la referida



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

sentencia de amparo; sin embargo, esta Segunda Sala estima que no estaban satisfechos los

requisitos necesarios para que el referido Tribunal Colegiado de Circuito se pronunciara sobre el acatamiento del fallo protector, como se expone a

continuación.--- En primer lugar y como se señaló en la parte relativa de esta resolución, la competencia para conocer los incidentes de inejecución de sentencia por parte de los Tribunales Colegiados de Circuito, constituye una facultad delegada por este Máximo Tribunal en el Acuerdo General 5/2001, del cual se desprende implícitamente la potestad para, determinar, con base en las constancias de autos y en los informes rendidos por las responsables, si la ejecutoria está cumplida o no lo está, previa vista que le dé a la

ORTE
A NACION
BALA
ACUERDOS

quejosa.--- En efecto, en cuanto al conocimiento de los incidentes de inejecución por parte de los Tribunales Colegiados de Circuito en facultad delegada, el referido acuerdo estableció como justificación, hipótesis de procedencia y procedimiento, lo siguiente:--- 1. Que para agilizar el trámite de los incidentes de inejecución, y a fin de lograr el eficaz cumplimiento de las sentencias de amparo, era conveniente que se resolvieran por los Tribunales Colegiados de Circuito "aprovechando su cercanía a los justiciables para los efectos de interrumpir la caducidad de la instancia y evitar los gastos que deben erogarse para acudir a esta

capital a atender dichos asuntos" (**Considerando Décimo Tercero del Acuerdo 5/2001**).---- 2. Que actualmente son los **Tribunales Colegiados de Circuito** quienes pueden conocer los incidentes de inexecución de sentencia planteados por los juzgados de distrito o la autoridad que conoció el juicio de amparo indirecto (**punto Quinto, fracción IV del Acuerdo 5/2001**).--- 3. Que la tramitación de los incidentes de inexecución ante los **Tribunales Colegiados** está prevista en los puntos **Décimo Quinto y Décimo Sexto del Acuerdo Plenario 5/2001**, los que esencialmente señalan que:

3.1. Al radicar y registrar un incidente de inexecución el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento deberá requerir a las autoridades responsables, con copia a su superior jerárquico, en su caso, para que en un plazo de diez días hábiles, demuestren ante el propio tribunal el acatamiento de la ejecutoria, o le expongan las razones que tengan en relación con el incumplimiento de la sentencia, apercibiéndolas de que, en caso de ser omisas ante ese requerimiento, se continuará el procedimiento respectivo que puede culminar con una resolución en los términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y

3.2. Que cuando estimen que deben aplicarse las sanciones previstas en ese precepto constitucional, previo dictamen suscrito por los tres Magistrados,



INCONFORMIDAD 65/2007.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

deberán remitir el asunto a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciéndolo del conocimiento de las autoridades responsables respectivas.

De lo expuesto se desprende que se confirió a los Tribunales Colegiados de Circuito la facultad de resolver los incidentes de inejecución con base en las constancias de autos y los informes de las autoridades responsables, declarando que una sentencia de amparo está cumplida o remitiendo el asunto a la Suprema Corte en caso de que no sea así; por tanto, en el primer caso, podrán declarar que el incidente respectivo ha quedado sin materia.--- No obstante lo anterior, debe destacarse que conforme a lo que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios jurisprudenciales, en la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo las autoridades responsables informen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito, el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo que de no desahogarlo dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos con los que se cuente; y que una vez vencido el plazo otorgado, el Juez de Distrito, el Tribunal Unitario de Circuito o el

Tribunal Colegiado de Circuito, dictarán un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decidan si la sentencia de amparo fue cumplida o no, pero después de dar a la parte quejosa la oportunidad de ser oída al respecto.--- En ese tenor, previamente al pronunciamiento sobre el acatamiento al fallo protector el órgano colegiado que emitió la resolución que dio origen a la presente inconformidad debió dar vista a la impetrante de amparo con los informes remitidos por las autoridades responsables sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; sin embargo, de los autos del incidente de inejecución de sentencia 13/2005 del índice del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito no se advierte que se haya agotado esa exigencia, en respeto del derecho de la parte quejosa a ejercer sus defensas.--- En apoyo de lo anterior, se citan las tesis emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto, son los siguientes:

"INCONFORMIDAD, INCIDENTE DE. DEBE DECLARARSE FUNDADO SI EL JUEZ DE DISTRITO TIENE POR CUMPLIMENTADA LA EJECUTORIA DE AMPARO, SIN DAR VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE." (Se considera innecesario transcribir su texto). **"INCONFÓRMIDAD. EL A QUO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO SI AL RESOLVER**



INCONFORMIDAD 65/2007.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA

NO TOMA EN CUENTA LO ALEGADO AL DESAHOGAR LA VISTA, OMISIÓN QUE DEBE REPARARSE, AUN OFICIOSAMENTE, EN LA INCONFORMIDAD.” (Se considera innecesario transcribir su texto).

Asimismo, la cuestión aludida se encuentra descrita en los puntos 7 y 8, de la ya referida tesis de rubro: “CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA.”— En atención a la conclusión alcanzada, debe dejarse sin efectos la resolución pronunciada el diecinueve de enero de dos mil seis por el Primer

Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, en el incidente de inejecución de sentencia 13/2005 de su índice, en la que declaró cumplida la ejecutoria de

amparo, y como consecuencia, remitirse los autos del presente asunto a dicho Tribunal Colegiado para que dé vista a la parte quejosa con los informes rendidos por las autoridades responsables sobre el acatamiento a la ejecutoria de amparo dentro del plazo que la Ley de la materia prevé, y con base en lo que dicha impetrante exponga (si es el caso) y con las constancias de autos, se pronuncie sobre el cumplimiento de la sentencia protectora.”



CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SALA DE ACUERDOS

NOVENO. Mediante proveído de ocho de noviembre de dos mil seis, el referido órgano colegiado se avocó al conocimiento del asunto en términos de la ejecutoria en cuestión y ordenó dar vista a la parte quejosa ***“...con los informes rendidos por las autoridades responsables sobre el acatamiento a la sentencia pronunciada en el juicio de amparo...”***, a efecto de que, en un plazo de tres días, manifestara lo que a su derecho conviniera, bajo el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, se resolvería lo procedente con apoyo en los informes y demás elementos con que se contara.

La parte quejosa desahogó la vista, en el sentido de que se declarara incumplida la ejecutoria y, mediante resolución de veintiocho de enero dos mil siete, el Tribunal Colegiado declaró cumplida la ejecutoria de mérito en los términos siguientes:

“...II.- Los antecedentes del caso a estudio son los siguientes: (Se considera innecesaria su transcripción).--- ***Ahora bien, una vez que se ha dado el cumplimiento debido a la determinación contenida en la resolución que fue pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la inconformidad número 180/2006 promovida por la parte quejosa en este asunto, cabe ahora considerar que acorde con el sentido de la ejecutoria que concedió la Protección Federal, tal como se desprende de su examen por tenerse a la vista, resulta claro, tal como antes se sostuvo que los actos que debería realizar cada***



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

uno de los funcionarios públicos señalados como autoridad responsable para con ello restablecer las

cosas al estado que guardaban antes de producirse el acto que se estimó violatorio de garantías, restituyendo por lo tanto a los quejosos en el pleno goce de sus garantías individuales, tal como lo ordena el artículo 80 de la Ley de Amparo, serían:

a).- El Presidente del Ayuntamiento del Municipio de El Naranjo, San Luis Potosí, dejar sin efecto la orden emitida al Secretario del Ayuntamiento y al Tesorero del mismo en la Sesión de Cabildo celebrada el día primero de marzo de dos mil cinco que constituye el acto reclamado en la demanda de garantías por traducirse en una restricción a las garantías individuales de los quejosos por significar la retención de la compensación asignada a los peticionarios de garantías por el desempeño de su cargo como Regidores de dicho Ayuntamiento;

b).- El Secretario del Ayuntamiento de que se trata, tendría en su carácter de ejecutora que acatar las órdenes de su Superior jerárquico y a su vez comunicar al Tesorero del propio Ayuntamiento, que por disposición del Presidente Municipal debía dejar sin efecto las aludidas órdenes; y por último el Tesorero Municipal, en su carácter de autoridad señalada como ejecutora acatar las órdenes del Presidente Municipal en el sentido de dejar sin efecto la determinación de dicho funcionario tomada durante la Sesión de

ORTE DE
NACION
SALA
ACUERDOS

Cabildo que se celebró el día primero de marzo y que consistió en ordenar al Secretario del Ayuntamiento que asentara en el acta de Cabildo el que no se realizaría pago alguno a los quejosos a partir del día dos de marzo si no se presentaban a laborar en las instalaciones de la Presidencia Municipal con un horario de 09:00 a.m. a 15:00 p.m.

--- Así entonces, es manifiesto que la ejecutoria de amparo no tiene en sí misma el alcance legal de ordenar y menos obligar a la autoridad municipal señalada como responsable, tanto con el carácter de ordenadora como en su caso ejecutora, el realizar pago alguno a los quejosos por los conceptos de naturaleza laboral que refieren en la demanda de amparo, ya que la falta de dicho pago, en su caso, de existir después de que la autoridad municipal dejó sin efecto el acto reclamado, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de que el mismo se produjera, son cuestiones de legalidad, relativas al cumplimiento de obligaciones laborales, las que evidentemente son ajenas a la potestad constitucional si antes no son resueltas por la autoridad laboral competente.---

Así entonces, debe concluirse en que dando por cierto que acorde a lo informado a la Juez Quinto de Distrito en el Estado, en los respectivos oficios que le fueron dirigidos por el Presidente del Ayuntamiento del Municipio de El Naranjo, San Luis Potosí, el Secretario y el Tesorero del propio



INCONFORMIDAD 65/2007.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA UNIÓN**Ayuntamiento, tales funcionarios en su calidad de****autoridades señaladas como responsables llevaron****a cabo en acatamiento a la ejecutoria de amparo los****actos que en ellos detallan y que por lo tanto ello****es suficiente para considerar por no existir prueba****en contrario que lo demerite, que en el caso no****existe incumplimiento a la ejecutoria de amparo****como lo afirman los quejosos y entonces declarar****legalmente cumplida en sus términos la Ejecutoria****de Amparo pronunciada por este Tribunal****Colegiado al resolver el recurso de revisión en****materia Administrativa No. 379/2005 relativa al****juicio de amparo promovido por Elena Trejo****Saucedo y otros, ya que a lo así estimado, no es****óbice que la autoridad municipal señalada como****responsable solamente ha efectuado el pago****parcial de las prestaciones laborales que se le****reclaman, pues de ello debe conocer la autoridad****laboral competente, ante la cual han de****cuantificarse en la forma prescrita por la ley de la****materia."****DÉCIMO.** Por escrito presentado el treinta de enero de dos

mil siete, la peticionaria de amparo manifestó su inconformidad en

contra de la resolución que declaró cumplida la sentencia de

amparo, razón por la que el Tribunal Colegiado ordenó remitir los

autos a esta Suprema Corte, cuyo Presidente, mediante proveído

de ocho de marzo siguiente, ordenó formar y registrar el

expediente relativo, y dispuso que se turnara al Ministro José de

Jesús Gudiño Pelayo y se enviaran dichos autos a la Sala de su adscripción.

DÉCIMO PRIMERO. Posteriormente, mediante ejecutoria dictada el dieciocho de junio de dos mil siete, en el expediente 2/2007, relativo a la solicitud de ejercicio de la facultad prevista en el fracción IX del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Pleno de la Suprema Corte determinó que correspondía conocer de la presente inconformidad a esta Segunda Sala, al tener como antecedente la diversa inconformidad 180/2006, antes referida.

Por auto de cuatro de julio del mismo año, la Presidenta de la Segunda Sala determinó que ésta se avocara al conocimiento del asunto y se turnaran los autos al Ministro Mariano Azuela Güitrón.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente inconformidad, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; 11, fracción V, y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos tercero, fracción V, aplicado a contrario sensu, y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio del año dos mil uno, toda vez que no se está en el caso de



aplicar la sanción prevista en la primera de las disposiciones legales citadas.

En efecto, el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

"Art. 107.- Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

...

XVI.- Si concedido el amparo la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal, y la Suprema Corte de Justicia estima que es inexcusable el incumplimiento, dicha autoridad será inmediatamente separada de su cargo y consignada al Juez de Distrito que corresponda. Si fuere excusable, previa declaración de incumplimiento o repetición, la Suprema Corte requerirá a la responsable y le otorgará un plazo prudente para que ejecute la sentencia. Si la autoridad no ejecuta la sentencia en el término concedido, la Suprema Corte de Justicia procederá en los términos primeramente señalados."

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CORTES DE LA NACION
A SALA
9. ACUERDOS

Por otro lado, el artículo 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, dispone:

"ARTÍCULO 105.- ...

Cuando la parte interesada no estuviere conforme con la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, se enviará también, a petición suya, el expediente a la Suprema Corte de Justicia. Dicha petición deberá presentarse dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la resolución correspondiente; de otro modo, ésta se tendrá por consentida.

De igual manera, los artículos 11, fracción V, y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señalan:

"ARTÍCULO 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus miembros, y tendrá las siguientes atribuciones:

...

V. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de acuerdos generales. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno, lo hará del conocimiento de este último para que determine lo que corresponda."

"ARTÍCULO 21. Corresponde conocer a las Salas:



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

XI. Las demás que expresamente les encomiende la ley."

Finalmente, los puntos tercero, fracción V, y cuarto, del Acuerdo general número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecen:

"TERCERO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia conservará para su resolución: ... V. La aplicación de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

CUARTO. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el punto precedente, siempre y cuando uno u otros no deban ser remitidos a los Tribunales Colegiados de Circuito.

De la interpretación armónica de los anteriores preceptos se desprende que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia tiene la competencia originaria para conocer y resolver los incidentes de inejecución de sentencia y las inconformidades; también está facultado para remitir los asuntos de su competencia a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, a través de acuerdos generales.

Con fundamento en esta última atribución el Tribunal Pleno de este máximo Tribunal emitió el Acuerdo General 5/2001 el veintiuno de junio de dos mil uno, mediante el cual, en el punto cuarto, determinó conservar para su resolución los asuntos relacionados con la aplicación de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por exclusión, corresponde a las Salas resolver las inconformidades cuando no es el caso de aplicar esa sanción, como en el presente.

No es obstáculo a lo anterior, lo establecido en el punto quinto, fracción IV, del acuerdo referido, en el que se otorga competencia a los Tribunales Colegiados de Circuito, para resolver: ***“IV. Los incidentes de inejecución, las denuncias de repetición del acto reclamado consideradas fundadas por el Juez de Distrito y las inconformidades promovidas en términos de los artículos 105 y 108 de la Ley de Amparo, derivados de sentencias en que se conceda el amparo, dictadas por Jueces de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito.”***

La conclusión anterior se apoya en la circunstancia de que, aunque es cierto que el caso deriva de una sentencia en que se concedió el amparo por un juez de Distrito (en vía de revisión), lo cierto es que no fue él quien se pronunció sobre el cumplimiento de la ejecutoria, sino que ***“...ante la manifestación de imposibilidad expresada por las autoridades responsables para cumplir con la ejecutoria dictada en el presente asunto y a efecto de no retardar indefinidamente el cumplimiento de la***



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN

misma,...” ordenó remitir “...*el presente expediente al Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, en San Luis Potosí, que se*

encuentre de turno, para que emita el pronunciamiento que en derecho corresponda, sobre la ejecución o inejecución de la sentencia de que se trata....”, según se advierte del auto de dieciséis de noviembre de dos mil cinco, es decir, remitió los autos al Tribunal Colegiado de Circuito y fue éste el que, en sustitución de la a quo, la declaró cumplida; de ahí que no sea posible jurídicamente remitir el asunto al propio Tribunal, por haber sido él mismo quien emitió la resolución que ahora se impugna. En relación con esta particularidad se hará mérito más adelante, por tratarse de una cuestión propia de la procedencia de la inconformidad.

En resumen, esta Segunda Sala de la Suprema Corte es competente para resolver la presente inconformidad, dado que no se trata en el caso de aplicar la sanción prevista en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, ni tampoco de remitirla al Tribunal Colegiado, por lo que cobra exacta aplicación al caso la disposición prevista en el punto cuarto del Acuerdo General de la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 5/2004, antes transcrita.

SEGUNDO. La resolución que declaró cumplida la ejecutoria se notificó a la parte quejosa, por lista, el martes veintitrés de enero de dos mil siete (foja 384 vuelta del expediente relativo al incidente de inejecución 13/2005 del índice del Tribunal Colegiado); por lo que si dicha notificación surtió efectos el miércoles veinticuatro, entonces el plazo de cinco días previsto en el párrafo tercero del artículo 105 de la Ley de Amparo,

transcurrió del jueves veinticinco al miércoles treinta y uno del repetido mes, descontándose los días veintisiete y veintiocho, por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 23 de la propia ley. Por tanto, si el escrito de inconformidad se presentó el treinta de enero en cita, es claro que se hizo en tiempo.

La anterior consideración se ilustra con mayor claridad en el cuadro siguiente:

ENERO DE 2007

DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAP
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23 Se notificó	24 Surtió efectos	25 primer día	26 segundo día	27
28	29 tercer día	30 cuarto día	31 quinto día			

TERCERO. Como cuestión previa debe dejarse asentado, en relación con la procedencia del presente asunto, que esta Segunda Sala, en la inconformidad 180/2006 (derivada del mismo juicio de amparo de donde deviene la del caso), resuelta en sesión de diez de julio de dos mil seis, consideró, entre otras cuestiones, que era procedente la inconformidad, en los siguientes términos:

“...Sentado lo anterior, procede ahora abordar lo relativo a las hipótesis de procedencia de la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

inconformidad prevista en el párrafo tercero del

artículo 105 de la Ley de Amparo, por lo que para

una mejor comprensión se transcribe el texto

respectivo: - - - Artículo 105.- (...)- - - De igual

forma, el criterio jurisprudencial transcrito en

párrafos precedentes, que trata sobre los principios

que rigen el cumplimiento de las sentencias de

amparo, también describe los lineamientos

relativos a la inconformidad a que se refiere la

porción normativa citada.- - - En ese contexto, debe

decirse que si ante las diversas gestiones de la

autoridad judicial federal correspondiente para

lograr el cumplimiento de una sentencia concesoria

de amparo, la autoridad o autoridades

responsables comunican que acataron la

sentencia, el Juez de Distrito, el Magistrado del

Tribunal Unitario de Circuito o el presidente del

Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda,

deberán, en principio, dar vista al quejoso en

relación con esa manifestación de cumplimiento

para que exprese lo que a sus intereses convenga;

posteriormente, dictarán un acuerdo en el que

resolverán, con base en las manifestaciones del

quejoso (si las hubo) y de las constancias de autos,

si se dio o no el cumplimiento al fallo protector.- - -

Es precisamente contra ese auto o determinación

emitida por la autoridad que haya conocido del

juicio de amparo (juez de Distrito en amparo

indirecto; o, Tribunal Colegiado de Circuito en



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

amparo directo), en la que declaran que está cumplida la ejecutoria de amparo, que la Ley de Amparo prevé como medio de impugnación a favor del quejoso, precisamente, la inconformidad (párrafo tercero del artículo 105).- - Ahora bien, el órgano que la propia ley señala para conocer de ese medio de defensa (inconformidad) es la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, en el Acuerdo General Plenario 5/2001, se delegó esa atribución a los Tribunales Colegiados de Circuito tratándose de las inconformidades que se promuevan contra la determinación de cumplimiento emitida por un Juzgado de Distrito. Esto es, sólo en dicho supuesto es inimpugnable la resolución del Tribunal Colegiado que declara infundada la inconformidad, aunque tratándose de la determinación pronunciada, en su caso, por un Tribunal Colegiado de Circuito en amparo directo, este Alto Tribunal conserva su competencia originaria.- - De los argumentos expuestos con anterioridad respecto de los aspectos de procedencia de los incidentes de inejecución de sentencia y las inconformidades previstas en el párrafo tercero del artículo 105 de la Ley de Amparo, en relación con el análisis integral de los antecedentes del presente asunto y de los procedimientos que lo conforman como son el juicio de amparo indirecto número 181/2005 (del índice del Juzgado Quinto de Distrito en San Luis



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**Potosí), el recurso de revisión número 379/2005 y
del incidente de inejecución de sentencia 13/2005**

**(ambos del índice del Primer Tribunal Colegiado del
Noveno Circuito), así como del recurso de
reclamación 87/2006-PL (resuelto por esta Segunda
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación),
se desprende en primer lugar, que la presente
inconformidad es procedente, en tanto que se
planteó contra una resolución que declaró
cumplida la ejecutoria de amparo, precisamente la
resolución de diecinueve de enero de dos mil seis,
dictada por el Primer Tribunal Colegiado del
Noveno Circuito, al resolver el incidente de
inejecución de sentencia número 13/2005, de su
índice; esto es así, en virtud de que la hipótesis de
la impetrante para promover esta inconformidad
fue que a través de la resolución del órgano
colegiado referido se declaró cumplida la ejecutoria
establecida en un juicio de amparo indirecto, en el que
fungió como quejosa; por otra parte, como se
relató en el segundo considerando de esta
resolución, el presente medio de impugnación fue
presentado dentro del plazo legal previsto en la ley
de la materia.**

...

De lo anterior se sigue que la anterior resolución se dictó en
una inconformidad derivada del mismo juicio de amparo de donde
emana este asunto; y que esta Segunda Sala ya determinó, en

esa anterior ejecutoria, la procedencia de la inconformidad contra la resolución dictada por el Tribunal Colegiado (en lugar del Juez de Distrito), sólo que no abordó el estudio de fondo al advertir una infracción procesal que ameritaba la reposición del procedimiento, consistente en que no se había dado vista a la parte quejosa con los informes remitidos por las autoridades responsables atinentes al cumplimiento de la ejecutoria, lo que motivó que este Alto Tribunal dejara sin efectos la resolución del Tribunal Colegiado que la había declarado cumplida y que se le devolvieran los autos para que diera vista a la parte peticionaria de garantías con dichos informes y, con base en lo que ésta expusiera, si era el caso, y con las constancias de autos, se pronunciara nuevamente sobre el cumplimiento de la sentencia protectora.

Ahora, como la resolución que se impugna en el caso deriva precisamente de ese segundo pronunciamiento por parte del Tribunal Colegiado, resulta innecesario que esta Sala se vuelva a pronunciar respecto de la procedencia, por tratarse de un tema ya superado.

Al respecto es aplicable, por analogía, la siguiente tesis de la Primera Sala de este Alto Tribunal, la cual se comparte:

"INCONFORMIDAD. NO ES ADMISIBLE ANALIZAR UNA CUESTIÓN QUE YA FUE MATERIA DE ESTUDIO AL RESOLVERSE UN INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DERIVADO DEL MISMO JUICIO DE AMPARO DE DONDE EMANÓ AQUÉLLA. Si en la Inconformidad se hace valer una cuestión respecto

de la cual ya se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver un incidente de inejecución de sentencia, derivado del mismo juicio de amparo de donde emanó aquélla, resulta inadmisibile jurídicamente que se vuelva a analizar, porque pronunciarse nuevamente sobre el mismo punto, sería como permitir que las resoluciones pronunciadas por este Alto Tribunal en los recursos o medios de defensa que establece la Ley de Amparo para lograr el cumplimiento de las sentencias de amparo, pudieran ser cuestionadas mediante otro recurso de la misma naturaleza, lo cual no está permitido tácita ni expresamente en la referida ley.” (Novena Época. Instancia: Primera Sala.



Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIII, Mayo de 2001. Tesis: 1a. XXXIV/2001. Página: 279).

ORTE DE
A NACIÓN
SALA
ACUERDO

CUARTO. En su escrito de inconformidad, la parte quejosa manifiesta, lo siguiente:

“CONCEPTOS DE INCONFORMIDAD.- PRIMERO.-

Al ser evidente el temor de aplicar la norma contra actos de autoridades, que de manera unilateral realizan actos arbitrarios en perjuicios del gobernado, ante la complacencia de los juzgadores, que contraste con la imagen que pretenden forjarse. No queda más opción al gobernado que considerar el reclamo de la

responsabilidad que esta complicidad genera, como un valor entendido entre integrantes de la Administración Pública, sin embargo, queda la ligera esperanza que aún perdure o subsistan el criterio de algunos de los integrantes del Poder Judicial, personas con principios axiológicos, que le permitan analizar el presente asunto bajo los elementales principios de legalidad, justicia y eficacia del actuar del Poder Judicial. ---

SEGUNDO.- A efecto de no desviar la atención central del fondo del asunto, el acto que se reclamó de las autoridades responsables, consistió en la orden de retener de manera infundada las compensaciones asignadas a los quejosos, lo que conlleva dos acciones elementales, 1.- La orden de No realizar el pago, y 2.- Su ejecución de no pago. --

Bajo este tenor tenemos que, el acto reclamado se circunscribe ineludiblemente a estos dos aspectos, al acto reclamado en sí, y su efecto que es la restitución de las consecuencias del efecto del acto que se reclama. --- Luego entonces, resulta contrario a todo derecho el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, quien determina resolver que la sentencia de amparo se limita a que las responsables revoquen el acto exclusivamente, no teniendo el alcance de obligar a estas a el pago de las compensaciones dejadas de pagar. --- Como ya se expuso el amparo y Protección de la Justicia de la Unión, fue otorgada



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

INCONFORMIDAD 65/2007.

FORMA A-55

contra la orden de retención dictada por el Presidente Municipal, haciéndose extensiva para las responsables ejecutoras, Secretario y Tesorero de dicho ayuntamiento, quienes a efecto de cumplir con el fallo protector. En los términos de lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, para el debido cumplimiento de esta ejecutoria el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación y la restitución de la garantía violada a los quejosos amparistas. No debe constreñirse a una simple declaración y revocación formal del acto reclamado a las responsables, sino que, debe aparejarse necesariamente con los actos materiales que contrarresten los perjuicios generados, es decir, la restitución de la garantía y el alcance de la concesión del amparo al quejoso, debe ineludiblemente comprender la revocación de la orden emitida formalmente con los documentos en que conste tal ordenanza del Presidente Municipal a las ejecutoras Secretario y Tesorero debiendo constar el acuse recibido correspondiente, y materialmente en el presente caso, que las ejecutoras emitan el acto que con motivo de la revocación omitieron, debiendo en consecuencia, pagar el monto total de las dietas retenidas desde el mes de marzo a la fecha a los quejosos, debiendo enviar constancia de tal cumplimiento a la Autoridad concesionaria del Fallo Protector, a fin



TE
NACION
SALA
TERCER

de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en acatamiento a lo dispuesto por el numeral 80 de la Ley de Amparo en vigor. --- Sirve como sustento la jurisprudencia aplicable al caso, visible en el apéndice 1975, Octava Parte, Pleno y Salas, Tesis 99 página 179 y 180, del Semanario Judicial de la Federación al tenor Literal que dispone. **"EJECUCIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO, A ELLA ESTAN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES SÚN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO"**. (Se considera innecesario transcribir el texto). --- Por lo tanto, no podemos estar conformes con la resolución emitida en el presente incidente, toda vez que, los efectos del fallo protector no solo se constriñe a la revocación de la orden que constituye el acto reclamado, sino también a la restitución de los conceptos que estos originaron que es el pago de las dietas correspondientes en nuestro carácter de regidores. --- Por último, es incongruente, la resolución incidental que determina tener por cumplido el fallo protector con un oficio del Presidente Municipal en donde revoca la orden emitida de tener nuestras compensaciones, cuando existen constancias en el que manifiesta al igual que la autoridad ejecutora, tesorero Municipal, de no poder cumplir el fallo protector que se le requiere, por estar financieramente imposibilitado para ello, considerando que tal situación es ilógica



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

INCONFORMIDAD 65/2007.

e ilegal en razón de que la Partida presupuestal para este fin debe estar intacta, por que, como se puede deducir simplemente, los recursos económicos de esta partida, debe estar dispuesta para este fin, que es el pago de las dietas, de los integrantes del Ayuntamiento, siendo ilógico que no se tengan tales recursos disponibles para su pago respectivo. --- TERCERO.- Subsidiariamente, No debe pasar desapercibido para esa entidad, que debido a la lentitud en la substanciación de este asunto, aunado al desinterés que mostraron los servidores públicos encargados de su atención, a la fecha de resolución, la titularidad de las autoridades responsables cambio a partir del 01 de Enero de 2007, por lo que antes de emitir su resolución, la entidad Colegiada de ese Poder Judicial debió requerir nuevamente a los nuevos titulares para su respectivo informe de cumplimiento, conforme lo dispuesto el criterio adoptado por el Máximo Tribunal de la Federación en su tesis aplicable al caso, que al tenor literal establece "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL CAMBIO DE TITULAR DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORIGINA LA NECESIDAD DE UN NUEVO REQUERIMIENTO". (Se considera innecesario transcribir el texto). --- CUARTO.- Así también, no pasa desapercibido que previamente al inicio del Incidente de inejecución de sentencia, la Juez de Distrito se pronuncia

SECRETARÍA DE JUSTICIA

TE DE
NACION
SALA
CUERDOS

respecto de la necesidad de agregar constancias que justifiquen el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, exigiendo a las responsables el pago de los conceptos dejados de pagar a los quejosos, lo cuál, según la resolución que se atiende, no es necesaria. --- La A quo, antes de solicitar el inicio del Incidente de Inejecución, implemento el Procedimiento de cumplimiento de la sentencia concesoria del amparo, requiriendo para su cumplimiento a las responsables y a través de sus superiores jerárquicos, que en este caso, lo es el H. Ayuntamiento. --- Bajo este tenor tenemos que, la A quo omitió cumplir con diverso requerimiento que debió realizarse al Congreso del Estado de San Luís Potosí, como entidad Pública Colegiada, en la que reside la Soberanía Estatal, y el órgano superior de los Gobiernos instaurados en el Estado de San Luís Potosí, quienes entre otras funciones tienen como fin la vigilancia en el cumplimiento de los Principios de Eficiencia y Eficacia de los Gobiernos que integran la Soberanía del Estado de San Luís Potosí, es decir, si bien es cierto, los Gobiernos Municipales gozan con el beneficio de autonomía otorgada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también es cierto que dicha autonomía no los libera de la sujeción de la revisión de sus actos por conducto de un ente superior, cuya función recae en las legislaturas locales, quienes por disposición constitucional



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA A-55

INCONFORMIDAD 65/2007.

tienen la facultad de sancionar todos esos actos u omisiones que impliquen una función indebida, máxime aún, si un Tribunal Judicial requiere el cumplimiento de actos de servidores Públicos en funciones, tendientes a la salvaguarda y restitución de garantías individuales afectadas. --- Es aplicable al presente caso, el criterio adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que literalmente dispone. "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDIMIENTO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A QUE EL JUEZ DE DISTRITO LO INICIE". --- (Se considera innecesario transcribir el texto). --- Por lo antes expuesto y Fundado a ustedes C. Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito del Poder Judicial de la Federación Atentamente pido".

RTE DE
NACION
SALA
CUERDOS

Los anteriores agravios se pueden resumir de la siguiente manera:

1. El presente asunto debería analizarse bajo los elementales principios de legalidad, justicia y eficacia del actuar del Poder Judicial (agravio primero).
2. Resulta contraria a derecho la resolución impugnada al establecer que la sentencia de amparo se limita a que las responsables únicamente revoquen el acto reclamado (orden emitida por el Presidente Municipal para retener el pago de las

compensaciones asignadas a los quejosos en su carácter de regidores del Ayuntamiento), pues en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo, el cumplimiento no debe circunscribirse a una simple revocación formal del acto reclamado, sino también a pagar el monto total de las dietas retenidas **"...desde el mes de marzo a la fecha..."**

Agrega, que dicha resolución es incongruente porque se tiene por cumplida la ejecutoria con el oficio remitido por el Presidente Municipal responsable, para demostrar que se dejó sin efectos la orden de retención, cuando existen constancias del Tesorero Municipal en el sentido de que no es posible cumplir con el fallo protector **"...por estar financieramente imposibilitado para ello..."**, lo que es ilógico, ya que existe un presupuesto para cubrir las dietas respectivas (agravio segundo).

3. Toda vez que hubo cambio de autoridades municipales, a partir del uno de enero de dos mil siete, es decir, antes de que se emitiera la resolución combatida, debió requerirse a esas nuevas autoridades el cumplimiento de la ejecutoria, de acuerdo con el criterio aislado que cita, emitido por la Primera Sala de este Alto Tribunal (agravio tercero).

4. La Juez de Distrito requirió a las autoridades responsables el cumplimiento de la ejecutoria exigiéndoles el pago de los conceptos que se dejaron de cubrir a los quejosos, lo cual, según la resolución impugnada, no es necesario; y que, además, antes del incidente de inejecución, implementó el procedimiento de cumplimiento de la sentencia requiriendo a



INCONFORMIDAD 65/2007.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

dichas responsables a través de sus superiores, pero que omitió requerir al Congreso del Estado, pues a pesar de que los gobiernos municipales gozan de autonomía, es al propio Congreso a quien corresponde la revisión de sus actos, ya que las legislaturas locales, por disposición constitucional, tienen la facultad de sancionar todos los actos u omisiones que impliquen una función indebida, más aún tratándose de la restitución de garantías (agravio cuarto).

QUINTO. Antes de examinar los agravios, como cuestión previa, conviene formular una serie de reflexiones vinculadas con el cumplimiento de las sentencias de amparo.

Al respecto, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, que establece:

ARTÍCULO 80.- *La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija."*

El precepto transcrito dispone que la concesión del amparo tendrá por objeto que se restituya al quejoso en el derecho

subjetivo público violado, para lo cual deben reestablecerse las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida.

Ahora bien, esta Segunda Sala ha sentado el criterio de que cuando se otorga el amparo en contra de una sentencia o laudo, por irregularidades procesales o formales, o bien cuando habiéndose estudiado el fondo de la controversia se hayan definido todas las cuestiones debatidas, el cumplimiento del fallo protector consiste, en esencia, en dejar sin efecto la resolución jurisdiccional reclamada y emitir otra que atienda a la sentencia de la Justicia Federal; regla que se encuentra contenida en la tesis siguiente:

"INCONFORMIDAD CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA UNA SENTENCIA EN AMPARO DIRECTO. ES INFUNDADA SI LOS AGRAVIOS ESTÁN ENCAMINADOS A DEMOSTRAR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO."

Cuando se otorga el amparo para efectos en contra de una sentencia o laudo, por irregularidades procesales o formales, o bien cuando habiéndose estudiado el fondo del asunto se hayan definido todas las cuestiones debatidas, el cumplimiento del fallo protector consiste, en esencia, en dejar sin efecto la resolución jurisdiccional reclamada y emitir otra que atienda a la sentencia de la Justicia Federal. De esta manera, si acorde con lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se limita a examinar si es



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

correcta o no la determinación que tuvo por cumplida la sentencia protectora, resulta evidente que los agravios en los que se aduzca que la nueva resolución jurisdiccional no cumple con exactitud lo ordenado en la sentencia de amparo deben declararse inoperantes, pues en todo caso ello constituye un cumplimiento defectuoso o con exceso, que debe combatirse a través del recurso de queja previsto en el artículo 95, fracciones IV y IX, de la Ley de Amparo.” (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXVI, Agosto de 2007. Página: 539. Tesis: 2a./J. 128/2007. Jurisprudencia. Materia: Común).



Por otro lado, esta Segunda Sala también sentó el criterio de que cuando la sentencia concesoria se basa en la presunción de certeza del acto reclamado, conforme a lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley de Amparo, y en el hecho de que la conducta positiva que el quejoso imputa a las autoridades señaladas como responsables consiste en actos que por su simple emisión transgreden directrices constitucionales en razón de que aquéllas se encuentran desprovistas en forma absoluta de las facultades para emitirlos (lo que conlleva que para resolver sobre su constitucionalidad no es necesario atender a los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado), para el debido cumplimiento de aquélla, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación deberá tener lugar con

independencia de que materialmente el acto reclamado se haya emitido o no, en razón de que para efectos del juicio de garantías el actuar inconstitucional de la autoridad sí existió y trascendió a la esfera jurídica del agraviado por lo que para el debido acatamiento de la sentencia de amparo será necesario que la autoridad responsable revoque el acto reclamado y los efectos que de él pudieren derivarse.

Con la precisión de que la declaración de voluntad que emita la autoridad competente para revocar el acto declarado inconstitucional encuentra restringido su alcance al juicio de amparo respectivo y a la esfera jurídica del peticionario de garantías, por lo que, por sí misma, tal revocación no podrá constituir una presunción que sirva de sustento a cualquier actuación ajena al juicio de garantías del que deriva el procedimiento dentro del cual se actúa. Lo anterior en razón de que la presunción de certeza de los actos reclamados en el juicio de garantías, prevista en el artículo 149 de la Ley de Amparo, tiene limitados sus alcances al propio juicio en que se determine dicha presunción y a los efectos que deriven de la sentencia concesoria que, en su caso, se dicte, con independencia de que el acto cuya constitucionalidad se controvierta haya o no existido materialmente y de las consecuencias que en otras instancias y ante otras autoridades ello pueda acarrear.

Los anteriores razonamientos se contienen en la ejecutoria dictada el catorce de agosto de mil novecientos noventa y ocho, en el incidente de inejecución 367/97, resuelto por unanimidad de cuatro votos y que originó la tesis siguiente:



INCONFORMIDAD 65/2007.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**SENTENCIA DE AMPARO. LA AUTORIDAD**

RESPONSABLE DEBE REVOCAR EL ACTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL QUE SE TUVO POR CIERTO ANTE LA FALTA DE INFORME JUSTIFICADO Y QUE EN SÍ MISMO ES VIOLATORIO DE GARANTÍAS, CON INDEPENDENCIA DE QUE EFECTIVAMENTE LO HAYA EMITIDO. Conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, sin que quede a cargo del quejoso acreditar los hechos que determinen su inconstitucionalidad en el caso en que dicho acto sea en sí mismo violatorio de garantías. De ahí que si la protección constitucional otorgada se funda en dicha presunción de certeza y en el hecho de que la conducta positiva que el quejoso atribuyó a la autoridad consiste en un acto que por su simple emisión resulta inconstitucional -pues para resolver esto último no es necesario atender a los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado- debe estimarse que para el debido cumplimiento de aquélla, en términos de lo dispuesto en el artículo 80 del propio ordenamiento legal, el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación deberá tener lugar con independencia de que efectivamente el acto

ORTE
A NACIÓN
SAL
ACUERDOS

reclamado se haya emitido o no, en razón de que para efectos del juicio de garantías el actuar inconstitucional de la autoridad sí existió y trascendió a la esfera jurídica del agraviado, de donde se sigue que para el debido acatamiento de la sentencia concesoria será necesario que la autoridad responsable revoque el acto reclamado y los efectos que de él pudieren derivarse; debiendo tenerse presente que la declaración de voluntad que al efecto emita la autoridad para revocar el acto declarado inconstitucional, encuentra restringido su alcance al respectivo juicio de amparo, por lo que, por sí misma, tal revocación no podrá constituir una presunción que sirva de sustento a cualquier actuación ajena a dicho juicio.” (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII. Noviembre de 1998. Tesis: 2a. CXXXIV/98. Página: 54).

Luego, tratándose de actos administrativos en que se concede la protección constitucional al haberse presumido ciertos, resulta insuficiente que la autoridad responsable se limite a revocarlos o dejarlos sin efectos, pues es necesario, además, que el tribunal de amparo constriña a la autoridad respectiva a que también deje insubsistentes todos los efectos o consecuencias de dichos actos, es decir, que actúe de manera positiva, si es el caso, volviendo las cosas al en que realmente se encontraban antes de la violación, pues sólo así se podrá restituir al quejoso en



INCONFORMIDAD 65/2007.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

el goce de la garantía individual violada, en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo, ya que de lo contrario, en caso de inconformidad por la parte quejosa o en el incidente de inejecución que eventualmente pudiere abrirse, este Alto Tribunal tendría que declararla fundada y devolver los autos al juez de Distrito al advertirse la omisión de diversas actuaciones por parte de las autoridades responsables que no han cumplido, lo que iría en demérito de la garantía de justicia pronta y expedita consagrada en el artículo 17 constitucional.

Al respecto es aplicable la siguiente jurisprudencia:

"INCONFORMIDAD. ES FUNDADA SI DE LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES CORRESPONDIENTES SE DESPRENDE QUE EXISTEN ACTOS PENDIENTES DE CUMPLIRSE PARA EL ACATAMIENTO DEL FALLO CONSTITUCIONAL"

El efecto de la sentencia que concede el amparo es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como lo prescribe el artículo 80 de la Ley de Amparo, de esta forma, si de la aplicación de las disposiciones legales correspondientes, se advierte que volver las cosas al estado que guardaban, requiere la realización de diversas actuaciones por parte de las autoridades responsables que no han cumplido, debe estimarse que la inconformidad es fundada y deben devolverse los autos al Juez de Distrito para que

requiera de ellas el cumplimiento de la ejecutoria constitucional. (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIII, Abril de 2001. Tesis: 2a./J. 14/2001. Página: 478).

Por tanto, es materia de la inconformidad analizar no solamente si la autoridad revocó o no el acto reclamado, sino también los efectos que de él pudieren derivarse, para lo cual podrá hacer uso de las facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar estos y en qué medida se encuentran vinculadas a cumplirlo las autoridades responsables, de acuerdo con la tesis siguiente de esta Segunda Sala:

"SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**estos preceptos dispone que no podrá archivarse
ningún expediente sin que esté enteramente**

**cumplida la sentencia de amparo. La interpretación
congruente de tales disposiciones constituye el
sustento en que se apoya toda determinación
encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de
las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que
se pretende es ejecutar un fallo emitido por los
tribunales de la Federación en un juicio de amparo,
ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a
los gobernados contra los actos de autoridad que
infrinjan sus garantías individuales. De esto se
sigue que si la causa del retardo para la ejecución
de la sentencia de amparo consiste en la confusión**

**respecto de la manera correcta en la que procede
cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar
solución a la situación descrita, la Suprema Corte
tiene facultades para establecer los alcances del
fallo protector, determinar qué autoridades se
encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué
medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno
cumplimiento de la sentencia de amparo.” (Novena**

Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Julio
de 1998. Tesis: 2a./J. 47/98. Página: 146).

La conclusión antes alcanzada tiene como excepción el caso
en que en la sentencia amparadora no se precisen sus efectos
concretos ni los actos que debe llevar a cabo la responsable para

acatarla, ni tampoco del expediente se desprendan elementos concretos para determinar tal circunstancia y, por lo mismo, si existe contumacia de la autoridad responsable en el incidente de inejecución o indebido cumplimiento del fallo constitucional en el caso de inconformidad, deben devolverse los autos al juez de Distrito para que tramite un incidente innominado en el que precise el alcance material y concreto del fallo constitucional y, en su caso, se pronuncie sobre si la ejecutoria está cumplida o no, valorando los elementos probatorios allegados por las partes, conforme a lo prescrito por los artículos 358 a 364 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria al amparo, como lo ordena el artículo 2o. de la ley de la materia, de acuerdo con la tesis siguiente:

"INEJECUCIÓN DE SENTENCIA E INCONFORMIDAD. CUANDO DE LA EJECUTORIA RESPECTIVA O DE LOS AUTOS NO SE DESPRENDEN ELEMENTOS PARA EVALUAR SI SE ENCUENTRA CUMPLIDA O NO, DEBE DEVOLVERSE LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO PARA QUE TRAMITE UN INCIDENTE INNOMINADO A FIN DE QUE LAS PARTES PRUEBEN Y ALEGUEN LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA PARA QUE AQUÉL ESTÉ EN APTITUD DE DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DEL FALLO CONSTITUCIONAL. El artículo 105 de la Ley de Amparo establece las instituciones del incidente de inejecución de sentencia y la inconformidad como mecanismos procesales relacionados con el



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

cumplimiento de un fallo constitucional; sin embargo, en ambos casos, se requiere para su tramitación que en la propia sentencia haya quedado precisado su efecto concreto y los actos que debe llevar a cabo la responsable para acatarlo, así como que del expediente se desprendan los elementos para evaluar si la ejecutoria se encuentra cumplida o no; por tanto, si de ésta y de las constancias respectivas no se desprenden elementos concretos para determinar tal circunstancia y, por lo mismo, si existe contumacia de la autoridad responsable en el incidente de inejecución o indebido cumplimiento del fallo constitucional en el caso de inconformidad, deben devolverse los autos al Juez de Distrito para que tramite un incidente innominado en el que precise el alcance material y concreto del fallo constitucional y, en su caso, se pronuncie sobre si la ejecutoria está cumplida o no, valorando los elementos probatorios allegados por las partes, conforme a lo prescrito por los artículos 358 a 364 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria al amparo, como lo ordena el artículo 2o. de la ley de la materia." (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XII, Julio de 2000. Tesis: 2a./J. 55/2000. Página: 67).



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SEGUNDA SALA
ACUERDO

En el mismo contexto, para determinar los efectos del acto reclamado que se ha presumido cierto, debe tenerse presente que el tercer párrafo del artículo 149 de la Ley de Amparo establece que: ***“Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.”***

El precepto legal transcrito establece dos hipótesis distintas por lo que toca a la carga de la prueba del acto reclamado; si el acto no es inconstitucional en sí mismo, la carga de la prueba recae en el quejoso; si dicho acto es inconstitucional en sí mismo, la carga de la prueba recae en la autoridad responsable.

En relación con el tema, en la ejecutoria que originó la tesis de rubro: ***“LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO.”*** (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Octubre de 1997. Tesis: 2a./J. 50/97. Página: 304), esta Segunda Sala emitió las siguientes consideraciones:



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Sentado lo anterior, se procede al examen de la segunda parte del tercer párrafo del artículo 149 de la Ley de Amparo.- - - Tal dispositivo legal establece, como regla general, que corresponde al quejoso demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado.- - - El propio numeral prevé sólo una excepción a lo anterior, consistente en que el peticionario de amparo queda relevado de la carga probatoria cuando el acto reclamado sea violatorio de garantías en sí mismo.- - - Por tanto, lo que determina si la carga probatoria recae en el quejoso es la circunstancia de que el acto sea o no inconstitucional en sí mismo; de ahí que sea indispensable precisar este concepto.- - - Un acto es en sí mismo violatorio de la Constitución Federal, cuando la autoridad no puede demostrar ni justificar con ningún medio de convicción que su contenido o proceder se apegue a lo dispuesto por dicha Carta Magna. En cambio, cuando la autoridad puede dar motivos, datos o pruebas conforme a las cuales dicho acto resultaría conforme a la Ley Fundamental, entonces no es en sí mismo violatorio.- - - Por ende, la inconstitucionalidad de un acto que en sí mismo es violatorio de garantías no está sujeto a prueba, ya que la contravención a la Ley Fundamental surge por la mera existencia del acto, de su naturaleza intrínseca, con

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SALA IV
ACUERDOS

independencia de otros elementos; como ejemplos de esto se pueden citar, el acto de molestia que no consta en mandamiento escrito, la orden de aprehensión que no proviene de autoridad judicial, el arresto por más de 36 horas, etcétera.- - Sería ilógico que ante un acto inconstitucional en sí mismo se recaben pruebas, pues, con independencia de ellas, de cualquier manera procederá conceder el amparo, por lo que el ofrecimiento y admisión de pruebas, en este caso, resultaría ocioso.- - “

Luego, cuando el tribunal de amparo juzga que está en presencia de un acto que es inconstitucional en sí mismo y que la autoridad responsable incumplió con la carga de rendir informe al respecto, entonces es su obligación aceptar los hechos en los términos planteados en la demanda de garantías por la parte quejosa y conceder el amparo atendiendo a las pretensiones de ésta.

Al respecto es aplicable la tesis siguiente:

“ACTO RECLAMADO, CUANDO NO CORRESPONDE AL QUEJOSO LA PRUEBA DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL. El artículo 149 de la Ley de Amparo, establece, en el párrafo 3o, la presunción legal de ser cierto el acto que se reclama, cuando la autoridad que se señala como responsable no informa; y la técnica jurídica en el



INCONFORMIDAD 65/2007.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

orden constitucional, está en el sentido de que no obstante la negativa de la autoridad, debe negarse la protección federal, cuando el acto reclamado no es en sí mismo violatorio de garantías; pero si el quejoso plantea en la demanda una situación ostensiblemente violatoria de garantías individuales, al asentar que la autoridad a la cual señala como responsable, trata de despojarlo de la posesión de una finca, sin motivo justificado, y que ese acto es atentatorio en sí mismo, porque no se han llenado las formalidades del procedimiento, y porque ninguna autoridad está capacitada para proceder en tal forma, y la autoridad responsable omite informar sobre el particular, hay que aceptar el hecho en los términos planteados por el quejoso, conceder a éste el amparo.” (Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen LVII. Página: 623).

CORTE DE
LA NACIÓN
PRIMERA SALA
DE ACUERDOS

En ese tenor, si ante la falta de informe justificado, tratándose de un acto que es inconstitucional en sí mismo, el tribunal constitucional tiene la obligación de aceptar los hechos en los términos planteados en la demanda de garantías por la parte quejosa y conceder el amparo atendiendo a las pretensiones de ésta; entonces, es evidente que el tribunal que conozca de la inconformidad (Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiados de Circuito) debe analizar lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria ponderando tanto la demanda como lo resuelto, en el entendido de que, al atender esto (lo resuelto),

tiene la facultad de precisar su alcance, señalar las autoridades vinculadas a cumplirlas y la medida en que cada una de ellas debe participar; sin embargo, al realizar esta función el tribunal del conocimiento, debe ser congruente con los argumentos y efectos plasmados en la ejecutoria respectiva, lo que significa que no tiene la facultad de imprimirle alcances distintos a los que se plasmaron, so pretexto de tenerla por cumplida, pues lo contrario haría nugatoria la protección constitucional otorgada al quejoso.

Asimismo, es claro que también debe correlacionar dichas actuaciones (demanda, sentencia y alcances) con los actos ejecutados por la responsable en vía de cumplimiento.

Ahora, al realizar esto último debe tenerse presente que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación había sustentado el criterio de que las inconformidades e incidentes de inejecución requerían, como presupuesto, una abstención total de acatamiento por parte de la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, como se infiere de las tesis que fueron publicadas, respectivamente, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y ocho, Primera Parte, página ochocientos veintiocho, y en el Volumen 49, Séptima Época, del mismo Semanario, página veintitrés, de rubro: **"INCONFORMIDADES PREVISTAS POR EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 105 DE LA LEY DE AMPARO E INCIDENTES DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. REQUIEREN, COMO PRESUPUESTO NECESARIO, LA IMPUTACIÓN DE UNA ACTITUD ABSTENCIONISTA TOTAL POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA**



INCONFORMIDAD 65/2007.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

"ACATAR LA EJECUTORIA DE AMPARO." e "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA Y RECURSO DE QUEJA. SON CONTRADICTORIOS Y NO PUEDEN COEXISTIR."

Sin embargo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte, al resolver el incidente de inconformidad 114/94 el quince de junio de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de once votos, si bien consideró que deben subsistir los conceptos fundamentales del criterio sustentado en tales precedentes, se apartó de la distinción tan absoluta o tajante que en los mismos se efectuó entre las situaciones jurídicas producidas por la conducta de las autoridades obligadas al acatamiento de la ejecutoria de amparo, porque al reducirlas solamente a inejecución total, por una parte, y a inejecución parcial por otra, se media el estudio de otras actividades autoritarias que pueden constituir subterfugios para evadir el cumplimiento del fallo y que también ameritan la aplicación de las sanciones establecidas por la fracción XVI del artículo 107 constitucional, máxime que los precedentes de mérito, se dijo, no desenvuelven ni explican qué debe entenderse por principio de ejecución, que es pieza importante en la distinción que adoptan.

De la ejecutoria transcrita derivó la tesis cuyos rubro, texto y datos de identificación son los siguientes:

"INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE 'PRINCIPIO DE EJECUCION' QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS

PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO. Este tribunal decide apartarse del criterio sostenido en la tesis que con el título de: **'INCONFORMIDADES PREVISTAS POR EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 105 DE LA LEY DE AMPARO E INCIDENTES DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. REQUIEREN, COMO PRESUPUESTO NECESARIO, LA IMPUTACIÓN DE UNA ACTITUD ABSTENCIONISTA TOTAL POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA ACATAR LA EJECUTORIA DE AMPARO.'**, está publicada en el *Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y ocho, Primera Parte, página ochocientos veintiocho*, pues un nuevo examen de la fracción XVI del artículo 107 constitucional vigente, en relación con el sistema previsto en la Ley de Amparo para lograr el cumplimiento de las sentencias protectoras, específicamente en sus artículos 95, fracciones II a V, 105, 106 y 107, muestra que los incidentes de inejecución y de inconformidad deben estimarse procedentes no sólo en el supuesto de que exista una abstención total de la autoridad responsable obligada a cumplir la sentencia, sino también en aquellos casos en que dicha autoridad realiza actos que no constituyen el núcleo esencial de la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

INCONFORMIDAD 65/2007.

FORMA A-05

prestación en la cual se traduce la garantía que se ~~estimo~~ violada en la sentencia, es decir, que se limita a desarrollar actos intrascendentes, preliminares o secundarios que crean la apariencia de que se está cumpliendo el fallo, toda vez que sólo admitiendo la procedencia de tales incidentes, se hace efectivo el derecho del quejoso de someter a la consideración de este Alto Tribunal la conducta de la autoridad responsable que a través de evasivas y actos de escasa eficacia, pretende eludir el cumplimiento del fallo protector, lo que no podría lograrse a través del recurso de queja por defecto o exceso en la ejecución, ya que su sustanciación en ningún caso conduciría a imponer la sanción prevista en el precepto constitucional en cita; en este sentido, habrá 'principio de ejecución' y serán improcedentes por tal motivo los incidentes de inexecución y de inconformidad, por surtirse los supuestos del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, considerando la naturaleza del bien fundamentalmente protegido o resguardado en la ejecutoria de amparo, que es el núcleo de la restitución en la garantía violada, el tipo de actos u omisiones de las autoridades necesarias para restaurar ese bien protegido y su sana intención de acatar el fallo. (Novena Época. Instancia: Pleno.



CORTE DE
DE LA NACIÓN
IDA SALA
DE ACUERDOS

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: II, octubre de 1995. Tesis: P. LXV/95. Página: 116).

Con base en lo anterior se puede afirmar que, para tener por cumplida una ejecutoria en que se otorgó el amparo al haberse presumido ciertos los actos reclamados por falta de informe justificado, las autoridades responsables están obligadas a revocar no sólo el acto reclamado sino los efectos que de él pudieren derivarse, ya que ambas cuestiones constituyen lo que en la tesis transcrita se califica como "núcleo esencial" de la protección constitucional, y que en realidad se refiere al acto que, de acuerdo con la sentencia de amparo, son suficientes para concluir que la misma ha sido cumplida cabalmente, será en cada caso en que, atendiendo a sus particularidades, el tribunal de amparo determine cuáles son esos efectos o consecuencias y cómo deben actuar las responsables, lo que preferentemente debe plasmarse en la sentencia protectora.

SC.
JUS.
SE
SECA.

En resumen, de todo lo expuesto, se pueden obtener las siguientes conclusiones:

1. Cuando se otorga el amparo en contra de una sentencia o laudo, por irregularidades procesales o formales, o bien cuando habiéndose estudiado el fondo de la controversia se hayan definido todas las cuestiones debatidas, el cumplimiento del fallo protector consiste, en esencia, en dejar sin efecto la resolución jurisdiccional reclamada y emitir otra que atienda a la sentencia de la Justicia Federal.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

2. Tratándose del cumplimiento de las sentencias de amparo en que se reclamaron actos emitidos por autoridades administrativas que se han presumido ciertos ante la falta de informe justificado, no opera la regla anterior, pues para el debido cumplimiento de aquéllas será necesario que la autoridad responsable revoque el acto reclamado y los efectos que de él pudieren derivarse.

3. En este último caso resulta insuficiente que la autoridad responsable se limite a revocar los actos o dejarlos sin efectos, pues es necesario, además, que el tribunal de amparo constriña a la autoridad respectiva a que también deje insubsistentes todos los efectos o consecuencias de dichos actos, es decir, que actúe de manera positiva, si es el caso, volviendo las cosas al en que realmente se encontraban antes de la violación, ya que de lo contrario, en caso de inconformidad por la parte quejosa o en el incidente de inejecución que eventualmente pudiere abrirse, este Alto Tribunal tendría que declararla fundada y devolver los autos al juez de Distrito para advertirse la omisión de diversas actuaciones por parte de las autoridades responsables que no han cumplido, lo que iría en detrimento de la garantía de justicia pronta y expedita consagrada en el artículo 17 constitucional.

4. Por tanto, es materia de la inconformidad analizar no solamente si la autoridad revocó o no el acto reclamado, sino también los efectos que de él pudieren derivarse, para lo cual podrá hacer uso de las facultades para establecer los alcances

del fallo protector, determinar éstos y en qué medida se encuentran vinculadas a cumplirlo las autoridades responsables,

5. Sin embargo, al realizar esta última función, el tribunal del conocimiento (Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiados de Circuito) debe ser congruente con los argumentos y efectos plasmados en la ejecutoria respectiva, lo que significa que no tiene la facultad de imprimirle alcances distintos a los que se plasmaron, so pretexto de tenerla por cumplida, pues lo contrario haría nugatoria la protección constitucional otorgada al quejoso.

6. Los actos efectuados por las responsables en vía de cumplimiento deben analizarse partiendo del criterio sostenido por el Pleno de este Alto Tribunal, en el sentido de que los incidentes de inejecución y de inconformidad deben estimarse procedentes no sólo en el supuesto de que exista una abstención total de la autoridad responsable obligada a cumplir la sentencia, sino también en aquellos casos en que dicha autoridad no realiza todos los actos para cumplir cabalmente con la prestación en la cual se traduce la garantía que se estimó violada en la sentencia, es decir, que se limita a desarrollar actos intrascendentes, preliminares o secundarios que crean la apariencia de que se está cumpliendo el fallo.

7. Lo anterior significa que, para tener por cumplida una ejecutoria en que se otorgó el amparo al haberse presumido ciertos los actos reclamados por falta de informe justificado, las autoridades responsables están obligadas a revocar no sólo el



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

acto reclamado sino cumplir con todos los efectos que de él pudieren derivarse, y será en cada caso en que, atendiendo a sus particularidades, el tribunal de amparo determine cuáles son esos efectos o consecuencias y cómo deben actuar las responsables, lo que debe plasmarse en la sentencia protectora.

SEXTO. Sentado lo anterior, debe decirse que resulta fundada la inconformidad; para demostrar esta conclusión habrá que atender a lo siguiente: 1. A dilucidar los efectos del fallo protector; 2. A establecer los actos desplegados por las responsables en cumplimiento a la ejecutoria; 3. A analizar las consideraciones esgrimidas por el Tribunal Colegiado en el auto mediante el cual se declaró cumplido dicho fallo, a la luz de los precedentes; y, 4. A señalar las directrices de la presente resolución. Todo lo anterior, con base en el marco jurídico a que se refiere el precedente considerando precedente.

COLEGIADO DE LA NACIÓN
SALA
DE ACUERDOS

1. Efectos del fallo protector.

De las transcripciones realizadas en los resultandos de este fallo, se advierte que los quejosos en su demanda de amparo reclamaron del Presidente Municipal referido ***“La orden de retener infundada e injustificadamente la compensación asignada a los quejosos en carácter de servidores públicos (regidores), sin mediar orden de autoridad competente que ordenen tal acto.”***

En los antecedentes de la demanda señalaron que el uno de marzo de dos mil cinco, se celebró sesión ordinaria de cabildo, y que al concluir ésta, el Presidente Municipal le ordenó al Secretario del Ayuntamiento que asentara en el acta de cabildo respectiva que no se realizaría pago alguno a los aquí quejosos, a partir de esa fecha, si a partir del dos de marzo del mismo año, no se presentaban a laborar en las instalaciones de la Presidencia Municipal, con un horario de las nueve a las quince horas; y que, posteriormente, el tres del mismo mes, el Secretario del Ayuntamiento les presentó el acta de dicha sesión de cabildo, en la que aparece la orden del Presidente Municipal.

El Tribunal Colegiado de Circuito, en vía de revisión, revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo, al estimar que la orden de retención de las compensaciones que tenían asignadas los quejosos en cuanto regidores del Ayuntamiento, era inconstitucional en sí misma, pues el Presidente Municipal carecía de facultades para ello; motivo por el que les otorgó la protección constitucional, para el efecto de que: ***“...El Presidente Municipal del Ayuntamiento de El Naranjo, San Luis Potosí, deje sin efecto la orden que en su caso haya emitido para retener el pago de las compensaciones que tienen asignadas dichos recurrentes, como regidores de dicha institución.--- El amparo concedido se hace extensivo respecto de las autoridades responsables Secretario y Tesorero del propio Ayuntamiento... toda vez que siendo inconstitucional el acto reclamado del Presidente Municipal, también lo son los actos relativos a la ejecución de dicho mandamiento que se atribuye a tales responsables ejecutoras.--- Por último, se***



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

127
FORMA A-55
INCONFORMIDAD 65/2007.

estima pertinente agregar que para el debido cumplimiento de esta ejecutoria, en términos de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación deberá tener lugar con independencia de que efectivamente el acto reclamado se haya emitido o no, en razón de que, para efectos del juicio de garantías, el actuar inconstitucional del Presidente Municipal de El Naranjo, San Luis Potosí, si existió y trascendió a la esfera jurídica del agraviado, de donde se sigue que para el debido acatamiento de la sentencia de amparo, será necesario que la referida autoridad responsable revoque el acto reclamado y los efectos que de él pudieren derivarse, en la inteligencia de que la declaración de voluntad que al efecto emita la autoridad para revocar el acto declarado inconstitucional, encuentra restringido su alcance al respectivo juicio de amparo, de tal suerte que tal revocación, por sí misma no podrá constituir una presunción que sirva de sustento a cualquier actuación ajena a dicho juicio."

La anterior determinación se apoyó en la tesis de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE REVOCAR EL ACTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL QUE SE TUVO POR CIERTO ANTE LA FALTA DE INFORME JUSTIFICADO Y QUE EN SÍ MISMO ES VIOLATORIO DE GARANTÍAS, CON INDEPENDENCIA DE QUE EFECTIVAMENTE LO HAYA EMITIDO.", transcrita en el considerando que precede.

Ahora, dado que la concesión del amparo derivó de la circunstancia de que, ante la falta de informe justificado, se presumió cierto el acto reclamado y éste se consideró inconstitucional en sí mismo, entonces debe partirse del supuesto de que el tribunal constitucional aceptó los hechos en los términos planteados en la demanda de garantías por la parte quejosa.

Con base en lo anterior se obtiene una primera conclusión: Que al amparo se otorgó a los quejosos, para el efecto de que el Presidente Municipal responsable: a) Dejara sin efecto la orden que en su caso hubiera emitido para retener el pago de las compensaciones que tenían asignadas dichos quejosos, como regidores del Ayuntamiento, lo cual se hizo extensivo a las responsables Secretario y Tesorero del propio Ayuntamiento; y, b) Las propias responsables revocaran no sólo ese acto, sino los efectos que de él pudieren derivarse.

Sin embargo, en la ejecutoria de amparo no se especificaron esos efectos; no obstante, partiendo del supuesto de que el acto reclamado se hizo consistir en la orden de que no se les pagaran las compensaciones asignadas en su carácter de regidores, y atendiendo a la certeza de lo planteado en la demanda, es lógico concluir que los efectos de esa orden derivaron en la retención de los mismos emolumentos. Por ende, los efectos en cuestión se traducen en que las autoridades responsables estaban obligadas a devolver a los quejosos las compensaciones asignadas a partir del uno de marzo de dos mil cinco, que fue la fecha a partir de la cual el Presidente Municipal ordenó que se les retuvieran.



INCONFORMIDAD 65/2007.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Entonces, para cumplir en sus términos la ejecutoria de amparo, las responsables estaban obligadas a realizar las siguientes actuaciones: 1. Dejar sin efectos la orden de retención del pago de las compensaciones, emitida por el Presidente Municipal; y, 2. En vía de consecuencia, devolver a los quejosos las compensaciones asignadas a partir del uno de marzo de dos mil cinco.

Lo anterior se corrobora con la circunstancia de que la Juez de Distrito, al agregar a los autos algunas de las constancias allegadas por las responsables para demostrar el cumplimiento de la ejecutoria, señaló que de ellas no se desprendía que los quejosos hubieran recibido las compensaciones que les habían sido retenidas, lo que también constituía materia de la protección constitucional, como se advierte del auto de treinta de septiembre de dos mil cinco (fojas 406 y 407 del expediente relativo al juicio de amparo).

ORTE DE
A NACIÓN
SALA
ACUERDOS

Actos desplegados por las responsables en cumplimiento a la ejecutoria.

El Presidente Municipal señalado como autoridad ordenadora, mediante oficio número 1011/005 recibido en el Juzgado de Distrito el ocho de septiembre de dos mil cinco, informó que había cumplido con la ejecutoria de amparo, toda vez que el seis del mismo mes había girado instrucciones "...al **Tesorero Municipal con copia para el Secretario del Ayuntamiento para que se cumpla lo ordenado por el**

Tribunal en los términos que marca su resolución.” (Foja 376 del juicio de amparo).

Acompañó a dicho informe copia del oficio que a su vez dirigió al Tesorero del mismo Ayuntamiento, con copia al Secretario de éste, en el que se asentó lo siguiente:

“6 de Septiembre del 2005.- C. LIC. MARCO ANTONIO HERRERA TOVAR. TESORERO MUNICIPAL. EL NARANJO, S.L.P.- PRESENTE.- Por este conducto y en cumplimiento de la resolución de fecha veinticinco de agosto del 2005 dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito en su expediente 379/2005 sírvase tener por revocado el oficio de fecha 31 de Marzo del año en curso por el que se ordena que los regidores GUADALUPE DEL CARMEN MARTÍNEZ SÁNCHEZ, SILVINO HERRERA BAZANA, ELENA TREJO SAUCEDO Y J. REFUGIO PAZ MUÑOZ no reciban sus compensaciones.- Así mismo y como lo ordena el Tribunal Colegiado se revoca el acto reclamado y los efectos que de él pudieren derivarse.- Acompaño a este oficio copia de la resolución emitida por el tribunal para su conocimiento.- Sin otro particular me suscribo como su atento y seguro servidor.- ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN.- ALFREDO ORTIZ LÓPEZ.- PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.- Rúbrica.” (Foja 377).



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El Tesorero y el Secretario del Ayuntamiento rindieron sendos informes en el mismo sentido y exhibieron copia del oficio transcrito (379, 380, 382 y 383).

También constan los oficios 1089/005 y 1088/005, suscritos, respectivamente, por el Presidente y el Tesorero Municipal, mediante los cuales informaron a la Juez de Distrito que no les había sido posible cumplir con la ejecutoria por razones financieras, según las copias de conciliación bancaria y estados de cuenta bancarios y auxiliares que aportaron (413 y 415 a 423).

Asimismo, mediante oficio presentado el diecinueve de octubre de dos mil cinco, el Tesorero del Ayuntamiento informó al Juzgado de Distrito, que no había sido posible cumplir con la ejecutoria en razón de que carecía de numerario, pero con la aclaración de que se estaba cumpliendo parcialmente con ella, toda vez que los quejosos habían comenzado a cobrar sus compensaciones, según copia certificada de la nómina correspondiente a la quincena del uno al quince de septiembre de dos mil cinco, que allegó al juicio, y de la cual se desprende que cada uno de los quejosos firmó de recibido por la cantidad de [REDACTED] (465 y 470).

También consta en autos del juicio de amparo el diverso oficio presentado el doce de enero de dos mil seis, por las responsables Presidente, Secretario y Tesorero del Ayuntamiento en cuestión, mediante el cual informaron al Juzgado de Distrito que, salvo algunas ocasiones, los quejosos no se habían

presentado a cobrar; y exhibieron copias certificadas de las nóminas correspondientes a las quincenas del uno de septiembre al treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, de las que aparecen firmadas de recibido por los cuatro quejosos la primera (quincena del uno al quince de septiembre); y la segunda y tercera (quincenas del dieciséis al treinta de septiembre y del uno al quince de octubre) solamente por Elena Trejo Saucedo y J. Refugio Paz Muñoz (666 y 672 a 674).

De la anterior se desprende, entonces, que: a) El Presidente Municipal dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la orden de que los regidores, aquí quejosos, no recibieran sus compensaciones; y, b) Éstos recibieron el pago de esos conceptos, todos ellos al menos en una ocasión y dos de ellos durante dos quincenas.

3. Análisis de las consideraciones esgrimidas por el Tribunal Colegiado en el auto mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector, a la luz de los agravios.

En el resultando noveno de esta sentencia se transcribió la resolución del Tribunal Colegiado materia de la presente inconformidad; no obstante, conviene transcribirla nuevamente para mejor comprensión de sus efectos:

“...II.- Los antecedentes del caso a estudio son los siguientes: (Se considera innecesaria su transcripción).--- Ahora bien, una vez que se ha dado el cumplimiento debido a la determinación



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

contenida en la resolución que fue pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la inconformidad número 180/2006 promovida por la parte quejosa en este asunto, cabe ahora considerar que acorde con el sentido de la ejecutoria que concedió la Protección Federal, tal como se desprende de su examen por tenerse a la vista, resulta claro, tal como antes se sostuvo que los actos que debería realizar cada uno de los funcionarios públicos señalados como autoridad responsable para con ello restablecer las cosas al estado que guardaban antes de producirse el acto que se estimó violatorio de garantías, restituyendo por lo tanto a los quejosos en el pleno goce de sus garantías individuales, tal como lo ordena el artículo 80 de la Ley de Amparo, serían:

a).- El Presidente del Ayuntamiento del Municipio de El Naranjo, San Luis Potosí, dejar sin efecto la orden emitida al Secretario del Ayuntamiento y al Tesorero del mismo en la Sesión de Cabildo celebrada el día primero de marzo de dos mil cinco que constituye el acto reclamado en la demanda de garantías por traducirse en una restricción a las garantías individuales de los quejosos por significar la retención de la compensación asignada a los peticionarios de garantías por el desempeño de su cargo como Regidores de dicho Ayuntamiento; b).- El Secretario del Ayuntamiento de que se trata, tendría en su carácter de ejecutora

CORTE DE
LA NACIÓN
A SALA
DE ACUERDO

que acatar las órdenes de su Superior jerárquico y a su vez comunicar al Tesorero del propio Ayuntamiento, que por disposición del Presidente Municipal debía dejar sin efecto las aludidas órdenes; y por último el Tesorero Municipal, en su carácter de autoridad señalada como ejecutora acatar las órdenes del Presidente Municipal en el sentido de dejar sin efecto la determinación de dicho funcionario tomada durante la Sesión de Cabildo que se celebró el día primero de marzo y que consistió en ordenar al Secretario del Ayuntamiento que asentara en el acta de Cabildo el que no se realizaría pago alguno a los quejosos a partir del día dos de marzo si no se presentaban a laborar en las instalaciones de la Presidencia Municipal con un horario de 09:00 a.m. a 15:00 p.m.

--- Así entonces, es manifiesto que la ejecutoria de amparo no tiene en sí misma el alcance legal de ordenar y menos obligar a la autoridad municipal señalada como responsable, tanto con el carácter de ordenadora como en su caso ejecutora, el realizar pago alguno a los quejosos por los conceptos de naturaleza laboral que refieren en la demanda de amparo, ya que la falta de dicho pago, en su caso, de existir después de que la autoridad municipal dejó sin efecto el acto reclamado, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de que el mismo se produjera, son cuestiones de legalidad, relativas al cumplimiento de obligaciones



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

laborales, las que evidentemente son ajenas a la potestad constitucional si antes no son resueltas por la autoridad laboral competente.--- Así entonces, debe concluirse en que dando por cierto que acorde a lo informado a la Juez Quinto de Distrito en el Estado, en los respectivos oficios que le fueron dirigidos por el Presidente del Ayuntamiento del Municipio de El Naranjo, San Luis Potosí, el Secretario y el Tesorero del propio Ayuntamiento, tales funcionarios en su calidad de autoridades señaladas como responsables llevaron a cabo en acatamiento a la ejecutoria de amparo los actos que en ellos detallan y que por lo tanto ello es suficiente para considerar por no existir prueba en contrario que lo demuestre, que en el caso no existe incumplimiento a la ejecutoria de amparo como lo afirman los quejosos y entonces declarar legalmente cumplida en sus términos la Ejecutoria de Amparo pronunciada por este Tribunal Colegiado al resolver el recurso de revisión en materia Administrativa No. 379/2005 relativa al juicio de amparo promovido por Elena Trejo Saucedo y otros, ya que a lo así estimado, no es óbice que la autoridad municipal señalada como responsable solamente ha efectuado el pago parcial de las prestaciones laborales que se le reclaman, pues de ello debe conocer la autoridad laboral competente, ante la cual han de

TE DE
NACIÓN
SALA
CUERPOS

cuantificarse en la forma prescrita por la ley de la materia."

De lo anterior se advierte, en síntesis que el apuntado órgano jurisdiccional consideró cumplida la ejecutoria de amparo con base en que las responsables habían dejado sin efectos la orden emitida por el Presidente Municipal al Secretario y al Tesorero del Ayuntamiento, en la sesión de cabildo celebrada el uno de marzo de dos mil cinco, relativa a la retención de la compensación asignada a los peticionarios de garantías por el desempeño de su cargo como regidores de dicho Ayuntamiento; y en cuanto a la devolución de las compensaciones (efectos), indicó que la ejecutoria de amparo no tiene en sí misma el alcance legal de ordenar y menos obligar a la autoridad municipal a realizar pago alguno, ya que se trataba de conceptos de naturaleza laboral, es decir, eran cuestiones de legalidad, relativas al cumplimiento de obligaciones laborales, las que eran ajenas a la potestad constitucional.

SUPR
 JUSTI
 SEG
 REGISTRO

En el agravio segundo, la parte inconforme aduce que resulta contraria a derecho la resolución impugnada al establecer que la sentencia de amparo se limita a que las responsables únicamente revoquen el acto reclamado (orden emitida por el Presidente Municipal para retener el pago de las compensaciones asignadas a los quejosos en su carácter de regidores del Ayuntamiento), pues en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo, el cumplimiento no debe circunscribirse a una simple revocación formal del acto reclamado, sino también a pagar el



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

la fecha...
monto total de las dietas retenidas "...desde el mes de marzo a

Agrega que dicha resolución es incongruente porque se tiene por cumplida la ejecutoria con el oficio remitido por el Presidente Municipal responsable, para demostrar que se dejó sin efectos la orden de retención, cuando existen constancias del Tesorero Municipal en el sentido de que no es posible cumplir con el fallo protector **"...por estar financieramente imposibilitado para ello..."**, lo que es ilógico, ya que existe un presupuesto para cubrir las dietas respectivas.

Los argumentos anteriores resultan fundados, pues si el amparo se concedió para que las autoridades responsables locaran el acto reclamado y sus consecuencias, por haberse presumido cierto el acto reclamado, el cual se consideró inconstitucional en sí mismo, es claro que, como antes se dijo, las autoridades responsables estaban obligadas, además de revocar el orden de retención, a devolver a los quejosos las compensaciones asignadas a partir del uno de marzo de dos mil cinco, que fue la fecha a partir de la cual el Presidente Municipal ordenó que se les retuvieran.

Es decir, para cumplir en sus términos la ejecutoria de amparo, las responsables estaban obligadas a realizar las siguientes actuaciones: 1. Dejar sin efectos la orden de retención del pago de las compensaciones, emitida por el Presidente Municipal; y, 2. En vía de consecuencia, devolver a los quejosos

las compensaciones asignadas a partir del uno de marzo de dos mil cinco.

Por ende, actuó incorrectamente el Tribunal Colegiado al establecer que era suficiente que las responsables hubieran revocado dicha orden; más aún, so pretexto de declarar cumplida la ejecutoria emitió una resolución incongruente al considerar que las compensaciones eran de naturaleza laboral.

Se afirma lo anterior, porque si en la sentencia de amparo estimó que estaba en presencia de un acto que es inconstitucional en sí mismo y que la autoridad responsable incumplió con la carga de rendir informe al respecto, entonces ello implica que aceptó los hechos en los términos planteados en la demanda de garantías por la parte quejosa y que concedió el amparo atendiendo a las pretensiones de ésta; por lo que si la propia quejosa se dolió de la orden de que se le retuvieran sus compensaciones es claro que, para tener por cumplida la ejecutoria, era necesario que se acreditara no solamente que se había dejado sin efectos ese mandato, sino que se le habían cubierto o devuelto tales conceptos, a partir de la fecha en que dijo la quejosa se emitió éste (uno de marzo de dos mil cinco).

Luego, si bien el Tribunal Colegiado estaba facultado, e incluso obligado, a analizar lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria ponderando tanto la demanda como lo resuelto, precisando su alcance, las autoridades vinculadas a cumplir la sentencia protectora y la medida en que cada una de ellas debía participar; sin embargo, también estaba obligado a ser congruente



INCONFORMIDAD 65/2007.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

con los argumentos y efectos plasmados en la ejecutoria respectiva, lo que significa que no tenía la facultad de imprimirle alcances distintos a los que se plasmaron en ella, so pretexto de tenerla por cumplida, pues con ese proceder no hizo sino nugatoria la protección constitucional otorgada a la parte quejosa, al privarla de las compensaciones a las cuales tenía derecho por ser consecuencia o efectos del acto estimado inconstitucional.

La anterior incongruencia se corrobora por la circunstancia de que el propio Tribunal Colegiado, al resolver el amparo en revisión 180/2005, el veintiuno de abril de dos mil cinco, revocó el auto originalmente dictado por la Juez de Distrito, en el que había desechado la demanda por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, al haber ésta considerado que la orden de retención de las compensaciones constituía un acto eminentemente laboral; ello al estimar dicho órgano colegiado que tal argumento de la Juez era incorrecto, debido a que los quejosos eran funcionarios designados mediante elección popular y que sus cargos eran obligatorios mas no gratuitos, ya que ellos mismos aprobaban, junto con el Presidente Municipal y el Síndico, el presupuesto de egresos en el que fijaban las partidas que correspondían a su remuneración; además de que, al admitirse la demanda, no podía juzgarse a priori si la orden de retención era o no un acto de autoridad (aspecto éste que el tribunal ya no introdujo en la diversa ejecutoria mediante la cual concedió el amparo, de donde se deduce que no consideró la retención como una cuestión laboral, sino como un acto de autoridad).

CORTE DE
MAYORÍA
SALA
I. A. V.

De lo anterior se infiere que, desde un inicio, el propio órgano jurisdiccional (cuya integración ha sido la misma al resolver todas las instancias del caso, es decir, la improcedencia, la revisión y el cumplimiento de la ejecutoria) asumió que no se trataba de cuestiones laborales; por ello es que se corrobora que asumió una conducta procesal incongruente al señalar lo contrario en la resolución que es materia de esta inconformidad.

Por tanto, como se anunció, debe declararse fundada la presente inconformidad.

Debe aclararse que lo que se aduce en el agravio que se examina en cuanto a la imposibilidad financiera de las responsables para cumplir con la ejecutoria, será un tema respecto del cual este Alto Tribunal se pronunciará más adelante.

Asimismo, también se verá el tema relativo al cambio de autoridades municipales; y por cuanto al requerimiento que, en su concepto, debió efectuarse el Congreso del Estado, ello podrá ser materia de análisis por parte del Juez a quo, en su oportunidad y caso.

ANPP
SECRETARÍA DE JUSTICIA
REGISTRO
SECRETARÍA

4. Directrices de la presente resolución para efectos del cumplimiento de la ejecutoria.

En el punto 1 de este considerando quedó visto que, para cumplir en sus términos la ejecutoria de amparo, las responsables estaban obligadas a realizar las siguientes actuaciones: 1. Dejar sin efectos la orden de retención del pago de las



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

134
FORMA A-55

INCONFORMIDAD 65/2007.

compensaciones, emitida por el Presidente Municipal; y, 2. En vía de consecuencia, devolver a los quejosos las compensaciones asignadas a partir del uno de marzo de dos mil cinco.

Asimismo, en el punto 2 se estableció que, en acatamiento al fallo protector, a) El Presidente Municipal dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la orden de que los regidores, aquí quejosos, no recibieran sus compensaciones; y, b) Éstos recibieron el pago de algunos de esos conceptos, todos ellos en la primera quincena de septiembre de dos mil cinco, y Elena Trejo Saucedo y J. Refugio Paz Muñoz en las quincenas del dieciséis al treinta de septiembre y del uno al quince de octubre (fojas 666 y 672 a 674 del expediente relativo al juicio de amparo).

Luego, dado que se está en presencia del cumplimiento un acto administrativo que se presumió cierto y que se consideró inconstitucional en sí mismo, resultaba insuficiente que la autoridad responsable se limitara a revocarlo o dejarlo sin efectos, pues era necesario, además, que también dejara insubsistente los efectos o consecuencias, a fin de restituir plenamente a la peticionaria de amparo en su garantía violada; sobre todo porque, en el caso, la insubsistencia de la orden de retener las compensaciones, en sí misma, en realidad, no redundó en ningún beneficio para los quejosos, supuesto que éstos siguieron en la misma situación de hecho en que se encontraban con motivo de la orden, es decir, sin percibir ningún concepto; por ende, es claro que, en casos como el presente, resulta de mayor beneficio el cumplimiento de los actos consecuencia del principal que de este mismo.

La conclusión anterior se apoya en la circunstancia de que, como antes se vio, los actos efectuados por las responsables en vía de cumplimiento deben analizarse partiendo del criterio sostenido por el Pleno de este Alto Tribunal, en el sentido de que los incidentes de inejecución y de inconformidad deben estimarse procedentes no sólo en el supuesto de que exista una abstención total de la autoridad responsable obligada a cumplir la sentencia, sino también en aquellos casos en que dicha autoridad realiza actos que no integran el pleno cumplimiento de la sentencia de amparo, al omitir el acatamiento de la prestación en la cual se traduce la garantía que se estimó violada en la sentencia, es decir, que se limita a desarrollar actos intrascendentes, preliminares o secundarios que crean la apariencia de que se está cumpliendo el fallo. Al respecto, conviene precisar que lo realizado por la responsable si bien no es suficiente para demostrar el referido cumplimiento sí lo es para probar que no ha incurrido en contumacia y por ello, por el momento no es de aplicarle lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, máxime que cuenta con una sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito en la que se concluyó que sí había cumplido con la sentencia de amparo.

Lo anterior significa que, para tener por cumplida una ejecutoria en que se otorgó el amparo al haberse presumido ciertos los actos reclamados por falta de informe justificado, las autoridades responsables están obligadas a revocar no sólo el acto reclamado sino los efectos que de él pudieren derivarse, y en su caso a realizar las acciones consecuentes, ya que ambas cuestiones constituyen la esencia de la protección constitucional,



INCONFORMIDAD 65/2007.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

y será en cada caso en que, atendiendo a sus particularidades, el tribunal de amparo determine cuáles son esos efectos o consecuencias y cómo deben actuar las responsables, lo que debe plasmarse en la sentencia protectora, lo cual si bien no se hizo en la del caso, lo cierto es que el análisis efectuado antes por este Alto Tribunal revela cuáles son los efectos o consecuencias del fallo protector.

Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 14/2001, de esta Segunda Sala, antes transcrita, de rubro: **"INCONFORMIDAD. ES FUNDADA SI DE LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES CORRESPONDIENTES SE DESPRENDE QUE EXISTEN ACTOS PENDIENTES DE CUMPLIRSE PARA EL ACATAMIENTO DEL FALLO CONSTITUCIONAL."**

De igual manera, es aplicable por analogía la tesis siguiente:

ORTE DE
LA NACIÓN
3. BALA
3. ACUERDO

"INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ AL EMPLEADO COMO RESULTADO DE LA INDEBIDA SUSPENSIÓN DE QUE FUE OBJETO EN EL CARGO, POR CARECER DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN LA ORDEN DE SUSPENSIÓN Y NO HABÉRSELE RESPETADO LA GARANTÍA DE AUDIENCIA, EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DEBE COMPRENDER LA REINSTALACIÓN EN SU PUESTO, CON TODAS LAS PRESTACIONES Y DERECHOS INHERENTES AL CARGO. En los casos en que la concesión del

amparo haya sido para que el quejoso sea restituido en sus funciones, de las cuales fue indebidamente suspendido, en razón de no estar fundada y motivada la orden que dio lugar a esa suspensión y de no habersele otorgado el derecho de audiencia, el cumplimiento de la sentencia debe abarcar la reinstalación en las funciones que venía desempeñando hasta antes de la irregular suspensión, así como el otorgamiento de las prestaciones y derechos de los que fue privado, inherentes al cargo, entre las que se encuentran los salarios generados y que se generen durante la suspensión, pues de no ser así, se debe estimar fundada la inconformidad que se plantee por falta de cumplimiento de la ejecutoria en los términos asentados, porque según el artículo 80 de la Ley de Amparo, para que se considere cumplida la sentencia que concede la protección de la Justicia Federal, se debe restituir al agraviado en el goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo.” (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Mayo de 1998. Tesis: 2a. LXXI/98. Página: 589).

No escapa a la consideración de este Alto Tribunal, lo expuesto por las responsables a la Juez de Distrito, en el sentido



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

136
FORMA A-55
INCONFORMIDAD 65/2007.

de que estaban imposibilitadas financieramente para devolver las compensaciones a los ahora inconformes; sin embargo, tal circunstancia no puede servir de excusa para cumplir con lo mandado en la ejecutoria, en razón de que el Pleno de este Alto Tribunal ya se pronunció al respecto en un asunto similar, en el que consideró que el Estado tiene la posibilidad de modificar el presupuesto original para adecuarlo a las necesidades sobrevenidas, gasto que necesaria e ineludiblemente debe autorizarse por tratarse del cumplimiento de un mandato de amparo cuya ejecución es imposterable; y que, además, si la autoridad ya tiene autorizado un presupuesto que le permite efectuar un pago, aun cuando no esté previsto específicamente en él, debe realizarlo si con ello da cumplimiento a un mandato de amparo, pues exclusivamente en esta hipótesis no podría considerarse jurídicamente que vulnera la prohibición contenida en el artículo 126 de la Constitución General de la República, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo no puede quedar condicionado a la determinación de si se aprueba o no una partida presupuestal para hacer frente a la obligación planteada, dado que la majestad de la Constitución Federal impone categóricamente que aquéllas sean cumplidas inexcusablemente, por lo que únicamente en esta hipótesis no puede operar el principio de responsabilidad que deriva del mencionado artículo 126 constitucional, pues técnicamente no se estaría contraviniendo, sino que se actualizaría un caso de excepción en el que no sería punible la conducta de la autoridad.

Lo anterior se desprende de la siguiente tesis:

"SENTENCIAS DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DE SU CUMPLIMIENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, fundamentalmente en la Quinta y Sexta Épocas del Semanario Judicial de la Federación, emitió diversas tesis en las cuales sostuvo el criterio predominante de que tratándose de obligaciones de pago derivadas de sentencias de amparo a cargo de las autoridades responsables, no se sancionaría su incumplimiento cuando el pago no se encontrara previsto en el presupuesto autorizado, de manera que la responsabilidad de aquéllas quedaba limitada a la mera gestión ante los órganos competentes para que se autorizara el gasto correspondiente. En este sentido se orientan los siguientes criterios históricos, de rubros: "CASO EN QUE NO ES APLICABLE, DE MOMENTO, LA FRACCIÓN XI EL ARTÍCULO 107 CONSTITUCIONAL. DEFECTO DE EJECUCIÓN."; "SENTENCIAS DE AMPARO, EJECUCIÓN DE LAS."; "SENTENCIAS DE AMPARO, INELUDIBLE EJECUCIÓN DE LAS." e "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA IMPROCEDENTE.", publicados, respectivamente, en el Informe de 1941, página 131 y en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXI, página 2277 y Tomo XLVII, página 4882, y

SUP
JUSTI
REG
SECRETAR



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

137
FORMA A-55
INCONFORMIDAD 65/2007.

Sexta Época, Volumen LXXVIII, Primera Parte,

página 14. Sin embargo, estos criterios no deben prevalecer en la actualidad pues, por una parte, obedecen a la interpretación aislada del artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (que originalmente era el 125) y, por otra, desconocen la fuerza vinculatoria de las ejecutorias de amparo cuya eficacia deriva del mandato constitucional. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el presupuesto de egresos se rige por el principio de anualidad, porque el ejercicio fiscal, por razones de política tributaria, comprende un periodo de un año, para el cual se planea precisamente el gasto público que implica la programación de actividades y cumplimiento de proyectos al menos durante ese tiempo, también lo es que el citado artículo 126 de la Norma Fundamental acepta que el presupuesto no debe ser estricto, inflexible, ni imposible de modificar, pues prevé la posibilidad de que pueda variarse al establecer que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior, de donde se desprende que en el propio texto de la norma constitucional referida, subyace el principio de modificación presupuestaria, al permitir que el gasto pueda programarse en dos momentos, uno anterior y otro posterior, a saber: a) Al aprobarse el presupuesto de egresos; o, b) En ley posterior, la



CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN
SALA IV
DE ACUERDO

que por su cronología necesariamente sucede a aquel proyecto presupuestario original en el tiempo; de manera que el precepto constitucional en mención, en lugar de constituir un valladar insuperable para la autoridad responsable, prevé la posibilidad de modificación del presupuesto original para adecuarlo a las necesidades sobrevenidas, es decir, su virtud es la de establecer un remedio para los casos fortuitos, que le permite solicitar los ajustes presupuestarios necesarios para enfrentar las obligaciones pecuniarias del Estado, gasto que necesaria e ineludiblemente debe autorizarse por tratarse del cumplimiento de un mandato de amparo cuya ejecución es impostergable. Además, si la autoridad ya tiene autorizado un presupuesto que le permite efectuar un pago, aun cuando no esté previsto específicamente en él, debe realizarlo si con ello da cumplimiento a un mandato de amparo, pues exclusivamente en esta hipótesis no podría considerarse jurídicamente que vulnerara la prohibición contenida en el artículo 126 de la Constitución General de la República, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo no puede quedar condicionado a la determinación de si se aprueba o no una partida presupuestal para hacer frente a la obligación impuesta, dado que la majestad de la Constitución Federal impone categóricamente que aquéllas sean cumplidas

SECRETARÍA
DE JUSTICIA
FEDERAL



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

inexcusablemente, por lo que únicamente en esta hipótesis no puede operar el principio de responsabilidad que deriva del mencionado artículo 126 constitucional, pues técnicamente no se estaría contraviniendo, sino que se actualizaría un caso de excepción en el que no sería punible la conducta de la autoridad. Asimismo, tal proceder tampoco contravendría el artículo 134 del Ordenamiento Fundamental, relativo al manejo de los recursos económicos con apego al principio de honradez, la cual se entiende como un actuar probp, recto, sin desvío alguno, pues no hay improbidad alguna en cumplir con un mandato de amparo, por el contrario, es un principio rector de los actos de la autoridad cumplir y hacer cumplir la Constitución y, por ende, los mandatos de amparo que derivan de ésta, cuya finalidad es el restablecimiento del orden constitucional."



CORTE DE
NACIÓN
SALA
AGUERO

Noventa Época. Instancia: Pleno.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Abril de 2002. Tesis: P. XX/2002. Página: 12).

Expuesto lo anterior, se estima que en el caso deben devolverse los autos al Juez de Distrito que conoció del asunto, debido a dos circunstancias: 1. Una, derivada de que, según se advierte del Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí que se acompañó a la demanda de garantías (fojas 8 a 17 del cuaderno de amparo), tanto las autoridades responsables como los aquí inconformes fueron

electos para el ejercicio constitucional 2004-2006, de donde se infiere que, a la fecha, existen nuevas autoridades responsables a las que no se ha oído en el procedimiento de ejecución de sentencia; y 2. Consistente en que, como se trata de percepciones económicas, debe cuantificarse, en un incidente que al respecto se abra, el total que deben cubrir las responsables, previa su audiencia, lo que no corresponde a este órgano colegiado.

1. En efecto, este Alto Tribunal ha considerado que la materia tanto del incidente de inejecución como de la inconformidad la constituye el análisis y determinación del incumplimiento a una ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables, cuando éstas han sido requeridas en los términos señalados por los artículos 104 y 105 de la Ley de Amparo, a fin de aplicar la sanción prevista en el artículo 107, fracción XVI, constitucional.

Esto es, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República y 104 de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia está facultada para determinar si las autoridades obligadas a dar cumplimiento a una sentencia de amparo han acatado los deberes que ésta les impone y, en su caso, determinar la separación inmediata del funcionario público del cargo y su consignación ante el Juez de Distrito correspondiente para que sea procesado en los términos del referido precepto constitucional.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

137
FORMA A-55

INCONFORMIDAD 65/2007.

Así pues, en caso de que esta Suprema Corte estime que el fallo protector ha sido incumplido sin justificación alguna, en virtud del desacato y contumacia de la autoridad responsable, en términos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, tendrá que:

a) Separarla inmediatamente de su cargo; y

b) Consignarla ante el Juez de Distrito que corresponda, para que éste le siga proceso penal por el delito equiparable al de abuso de autoridad previsto en el artículo 215 del Código Penal Federal. Conforme a lo dispuesto por el artículo 208 de la citada Ley de Amparo, en relación con el artículo 215 del Código Penal Federal, el Juez de Distrito está facultado para determinar la situación jurídica del funcionario público respectivo y, de ser procedente, decretar su destitución del cargo y su inhabilitación para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión de carácter público hasta por un periodo de nueve años.

CORTE DE
JUSTICIA DE LA
NACIÓN

Como puede verse, la primera medida guarda relación directa e inmediata con la función pública de la persona que funge como autoridad responsable, es decir, la separación tiene que ver con el carácter de servidor público del funcionario contumaz que al actuar de esa manera ha incurrido en abuso de autoridad.

Por otra parte, la consignación por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación del servidor público rebelde ante el Juez de Distrito correspondiente obedece a que su contumacia o desobediencia adquiere también naturaleza penal, pues configura

ya un tipo delictivo que habrá de sancionarse en los términos que el Código Penal Federal señala para el delito de abuso de autoridad, tal como lo previene el artículo 208 de la Ley de Amparo.

Lo anterior, evidentemente se entiende referido a la persona que funge como autoridad responsable y desobedece el mandato federal, ya sea por insistir en la repetición del acto reclamado o al tratar de eludir el cumplimiento del fallo protector, lo cual traerá como consecuencia la inmediata separación de su cargo y su consignación ante el Juez Federal que corresponda.

Las reflexiones hasta aquí expuestas en torno de la autoridad obligada al cumplimiento del fallo protector, permiten a esta Sala arribar a la convicción de que las medidas a que se hizo referencia son de tal naturaleza que siguen a la persona que, en ejercicio de sus funciones oficiales, incurrió en desacato, pues no debe olvidarse que son las personas quienes desempeñan los cargos de autoridades responsables, de tal modo que el incumplimiento o desacato del fallo constitucional de esta autoridad no puede desvincularse del individuo que tiene encomendada la responsabilidad gubernamental, pues es a dicho individuo a quien habrá de aplicársele, por este Alto Tribunal, la separación de su cargo y la consignación ante el Juez de Distrito respectivo, lo que se justifica sólo frente a su contumacia para cumplir con el mandato contenido en una ejecutoria de amparo, es decir, cuando éste y no otro asuma una conducta y actitud de obstinación o rebeldía ante el deber que le impone el fallo federal.

AL PR
JUS
SECRETARIA



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

140
FORMA A-55

INCONFORMIDAD 65/2007.

En otras palabras, las medidas de separación inmediata del cargo y la consignación ante el Juez de Distrito que corresponda obedecen a la postura consciente, deliberada y de mala fe, asumida por un individuo concreto que, actuando como autoridad responsable en un juicio de amparo, manifiesta una clara intención de evadir o burlar la majestad de la ejecutoria constitucional.

Las anteriores consideraciones fueron sustentadas anteriormente por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver, en sesión de veintitrés de octubre de dos mil, el incidente de inejecución 163/97, por unanimidad de diez votos.

Ahora bien, para que esta Suprema Corte de Justicia pueda pronunciarse sobre el incumplimiento de una ejecutoria de amparo y sobre si existe contumacia o no de la autoridad responsable, para efectos de decidir si procede su separación del cargo y su consignación inmediata, previamente deberán agotarse los procedimientos y respetarse las etapas o fases a que se refieren los artículos que integran el capítulo XII, De la ejecución de las sentencias, de la Ley de Amparo. Esto es:

Primera fase:

- Luego que cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo solicitado, o que se reciba testimonio de la ejecutoria dictada en revisión, se comunicará para su cumplimiento, sin demora alguna, a las autoridades responsables,

previniéndoles que informen sobre el cumplimiento que den a la ejecutoria de amparo, y se hará saber a las demás partes.

- Si dentro de las veinticuatro horas siguientes de la notificación a las autoridades responsables la ejecutoria no quedare cumplida o no se encontrare en vías de ejecución, la autoridad que haya conocido del juicio requerirá al superior inmediato de la autoridad responsable para que obligue a ésta a cumplir sin demora la sentencia, y si la autoridad responsable no tuviere superior, el requerimiento se hará directamente a ella.

- Cuando el superior inmediato de la autoridad responsable no atendiere el requerimiento y tuviere, a su vez, superior jerárquico, se requerirá a este último.

- Cuando no se obedeciere la ejecutoria, a pesar de los requerimientos a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad que haya conocido del juicio remitirá el expediente original a esta Suprema Corte para los efectos del artículo 107, fracción IV, constitucional, anteriormente analizado.

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

- Lo anteriormente dispuesto se observará también cuando se retarde el cumplimiento de la ejecutoria de que se trata por evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable o de cualquiera otra que intervenga en la ejecución.

- Las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad, por falta de cumplimiento de las



INCONFORMIDAD 65/2007.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ejecutorias, en los mismos términos en que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo.

Segunda fase:

Esta etapa compete exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien puede requerir a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia protectora y decidir si procede o no la adopción de las medidas establecidas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución General de la República, esto es, la separación del cargo y la consignación de la autoridad contumaz ante el Juez de Distrito que corresponda.

Como fue considerado por el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver el incidente de inejecución anteriormente citado, se advierte que el procedimiento descrito manifiesta la voluntad del legislador de salvaguardar la garantía de audiencia, tanto respecto de las autoridades responsables como de sus superiores jerárquicos, pues merced a los requerimientos que se les hagan a las autoridades de la Nación estarán informadas de la ejecutoria que están obligadas a cumplir, lo cual les permitirá intervenir para que se acate el fallo, evitando así que el expediente de amparo se remita a este Alto Tribunal y que se les apliquen las sanciones previstas en la fracción XVI del artículo 107 constitucional.

Así también busca respetar el orden ascendente de mandos, competencias y jerarquías establecido en los ordenamientos respectivos con el propósito de lograr el cumplimiento de una

ejecutoria de amparo, dándole oportunidad a las autoridades superiores de corregir la conducta contumaz de la responsable.

Lo hasta aquí señalado permite concluir que esta Suprema Corte no puede realizar la valoración sobre si un funcionario, que funge como autoridad responsable, fue contumaz o rebelde respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, si previo a ello no se ha agotado el procedimiento de la primera fase, descrito anteriormente, pues no se le ha dado a éste la oportunidad de cumplir de manera voluntaria el fallo protector, lo que violentaría su garantía de audiencia.

Así pues, al funcionario que, debido a un cambio, asuma el cargo de la autoridad responsable en el juicio, cuando no haya tenido presencia en el procedimiento de ejecución de una ejecutoria de amparo, deberá requerírsele del cumplimiento respectivo, una vez asumida su función o encargo.

Por lo anterior, cuando, previamente a la remisión del incidente de inejecución de sentencia a la Suprema Corte, aplicar la sanción prevista en el artículo 107, fracción XVI, constitucional, el Juez Federal no ha agotado el procedimiento respectivo para los efectos previstos por los artículos 104, 105 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el nuevo titular que ocupa el cargo de la autoridad responsable, este Alto Tribunal debe ordenar la reposición del procedimiento para tal fin, básicamente porque no se está en posibilidad de determinar en el incidente relativo sobre el incumplimiento de la ejecutoria y la procedencia de la sanción señalada en el precepto constitucional

SE
SECRETARIA
JUSTICIA
SE
SECRETARIA



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

142
FORMA A-82
INCONFORMIDAD 65/2007.

antes citado, dado que dicho titular no puede tener responsabilidad alguna si no ha sido siquiera requerido para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

Sirven de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de este Alto Tribunal y, por analogía, la jurisprudencia sustentada por esta Segunda Sala, cuyos rubros disponen: **"INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL CAMBIO DE TITULAR, OBLIGA A NUEVO REQUERIMIENTO."** (Sexta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Primera Parte. Tesis: XC. Página: 11), e **"INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. CUANDO EXISTA AUTORIDAD SUSTITUTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE, EN RELACIÓN CON ELLA, REQUERIRLA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 104, 105 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE AMPARO, DE LO CONTRARIO, PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO."** (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VII, Abril de 1998. Tesis: 2a./J. 1998. Página: 210).

Luego, toda vez que las nuevas autoridades del municipio El Naranjo, San Luis Potosí, es decir, Presidente Municipal, Secretario y Tesorero (en caso de que en realidad estos dos últimos lo sean, pues puede suceder que hayan repetido en el cargo, caso en el cual el Juez de Distrito deberá conminarlos a cumplir con la ejecutoria sin necesidad que respecto de ellos se siga nuevamente el procedimiento aludido), no han sido

requeridas para los efectos precisados en el artículo 105 de la Ley de Amparo, esta Sala estima conveniente devolver los autos del juicio de amparo del que deriva este incidente al juzgado de su origen, con el fin de que se agote nuevamente el procedimiento tendiente a lograr el cumplimiento de la sentencia de amparo, específicamente para que el Juez Federal requiera a la autoridades responsables antes citadas y, en su oportunidad y caso al Pleno del Ayuntamiento, en cuanto superior jerárquico de aquéllas, la devolución de las cantidades que debieron percibir los quejosos en su carácter de regidores por concepto de compensaciones, a partir del uno de marzo de dos mil cinco y hasta la fecha en que hayan concluido en su encargo.

Lo anterior, sin perjuicio ni detrimento de la intervención que, en el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, eventualmente le correspondiera a otras autoridades (por ejemplo el Congreso del Estado), debido a sus funciones, a la creación de nuevas autoridades sustitutas, a la asignación de nuevos ámbitos de competencias o responsabilidades, a la reestructuración orgánica de las existentes, así como a la responsabilidad en que incurrió el servidor público sustituido y que, en su momento, tendrá que examinarse.

2. Por otro lado, el Juez de Distrito también deberá tramitar un incidente en el que dé oportunidad a la parte quejosa y a las autoridades responsables de alegar lo que a su derecho convenga y ofrecer los medios de prueba que estimen conducentes, para establecer cuál es la cantidad que por dicho concepto debe entregarse a los hoy quejosos.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Hecho lo anterior, de ser procedente, el A quo deberá requerir a las citadas autoridades responsables el pago de la cantidad que resulte a favor de la parte quejosa, conforme al procedimiento previsto por los artículos 104 y 105 de la Ley de Amparo, apercibidas con remitir el expediente a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la aplicación inmediata de las sanciones a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución General de la República, en caso de omisión.

Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 55/2000 y en la tesis aislada 2a. LXXIX/98, sustentadas por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos textos y datos de identificación, son los siguientes:



"INEJECUCIÓN DE SENTENCIA E INCONFORMIDAD. CUANDO DE LA EJECUTORIA RESPECTIVA DE LOS AUTOS NO SE DESPRENDEN ELEMENTOS PARA EVALUAR SI SE ENCUENTRA CUMPLIDA O NO, DEBEN DEVOLVERSE LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO PARA QUE DE TRAMITE UN INCIDENTE INNOMINADO A FIN DE QUE LAS PARTES PRUEBEN Y ALEGUEN LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA PARA QUE AQUÉL ESTÉ EN APTITUD DE DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DEL FALLO CONSTITUCIONAL.- El artículo 105 de la Ley de Amparo establece las instituciones del incidente de inejecución de sentencia y la

inconformidad como mecanismos procesales relacionados con el cumplimiento de un fallo constitucional; sin embargo, en ambos casos, se requiere para su tramitación que en la propia sentencia haya quedado precisado su efecto concreto y los actos que debe llevar a cabo la responsable para acatarlo, así como que del expediente se desprendan los elementos para evaluar si la ejecutoria se encuentra cumplida o no; por tanto, si de ésta y de las constancias respectivas no se desprenden elementos concretos para determinar tal circunstancia y, por lo mismo, si existe contumacia de la autoridad responsable en el incidente de inejecución o indebido cumplimiento del fallo constitucional en el caso de inconformidad, deben devolverse los autos al Juez de Distrito para que tramite un incidente innominado en el que precise el alcance material y concreto del fallo constitucional y, en su caso, se pronuncie sobre si la ejecutoria está cumplida o no, valorando los elementos probatorios allegados por las partes, conforme a lo prescrito por los artículos 358 a 364 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria al amparo, como lo ordena el artículo 2o. de la ley de la materia." (Jurisprudencia publicada en la página 67 del Tomo XII, correspondiente al mes de julio de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época).

SUPRE
JUSTICIA
SEGUN
SECRETARIA



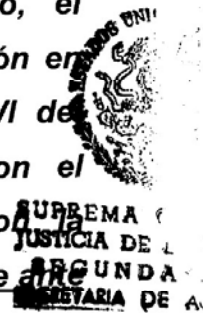
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

3. De igual manera, debe precisarse al Juez de Distrito que deberá ser él, quien, en su oportunidad y caso, emita la resolución en donde declare cumplida o incumplida la ejecutoria y no delegue esa obligación en el Tribunal Colegiado, como lo hizo con anterioridad; ello es así, porque conforme a la técnica que rige en el juicio de amparo, tratándose de los procedimientos de ejecución de las sentencias de amparo, es el Juez de Distrito el que debe pronunciarse en primer término al respecto, como se desprende del punto siete de la siguiente jurisprudencia:

"CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA. Del contenido de las jurisprudencias y tesis aisladas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con relación al sistema legal sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, derivan los siguientes principios: 1. Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras aquél no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad o autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. 3. Si no se logra el cumplimiento tendrá que acudir

CORTE DE
LA NACIÓN
A SALA
3. ACUERDO

al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se consigue, de oficio o a instancia de parte, deberá abrir el incidente de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a saber: que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito que corresponda. 5. Si durante el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber cumplido, el Pleno del más Alto Tribunal emitirá resolución en términos de lo dispuesto en la fracción XVI de artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de amparo. 7. En la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito, el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda,





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN

145
FORMA A-55

INCONFORMIDAD 65/2007.

deberán dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo de que, de no desahogarlo dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos con los que se cuente. 8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que no se haya desahogado la vista, el Juez de Distrito, el Tribunal Unitario de Circuito o el Tribunal Colegiado de Circuito, dictarán un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decidan si la sentencia de amparo fue cumplida o no. 9. En el caso de que la determinación sea en el sentido de que no se ha cumplido la sentencia, remitirán el asunto a la Suprema Corte, siguiéndose las reglas previstas en los puntos 4 a 6 anteriores. 10. Por el contrario, si resuelven que la sentencia de amparo se cumplió, deberán ordenar la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que esté en aptitud de hacer valer el medio de defensa procedente. 11. Para efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitará, exclusivamente, a verificar si se cumplió o no la ejecutoria (inclusive si sólo fue el núcleo esencial del amparo), cotejando dicha ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. 12. Ante la determinación del Juez de Distrito, del Tribunal Unitario de Circuito o del

RECEPCIÓN
AL A
EXPEDIENTE

Tribunal Colegiado de Circuito, correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: A. Que estime que no se dio en absoluto el cumplimiento, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia, impugnándose, obviamente, el acuerdo del Juez o del tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B. Que considere que si bien se dio el cumplimiento, éste fue con exceso o defecto, procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; C. Que estime que habiéndose otorgado un amparo para efectos, que dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales formales que dieron lugar a la protección constitucional, al emitirse la nueva resolución se trató de un acto nuevo, procederá el amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D. Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el

SUPREMA
CORTA DE JUSTICIA DE
SEGUNDA
SECRETARIA DE



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

174
FORMA A-55

INCONFORMIDAD 65/2007.

juicio de amparo en el que se pronunció la ~~sentencia~~ *sentencia que se pretendió cumplimentar; en este supuesto podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado. 13. Si lo que se interpone es la inconformidad y ésta resulta procedente se estará en las mismas condiciones especificadas en los puntos 5 y 6 mencionados. 14. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso estima que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente que corresponda el incidente respectivo, siguiéndose idéntico trámite al señalado en los puntos 4 a 6 anteriores, relativos al incidente de inejecución de sentencia.* (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Octubre de 2001. Tesis: 2a./J./G./2001. Página: 366).

CORTE DE
LA NACIÓN
SALA
ACUERDOS

Por último es de señalarse que aun cuando resultó fundada la presente inconformidad, no se está en el caso de aplicar a las autoridades responsables las sanciones aludidas, pues dadas las razones antes apuntadas, no puede concluirse de modo indubitable que existe desacato por parte de éstas para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, habida cuenta que por un lado, se trata de nuevas autoridades y, por otro, tienen a su favor

el pronunciamiento del Tribunal Colegiado que por esta vía se impugna.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de esta Segunda Sala, 2a./J. 33/95, publicada en la página 164 del Tomo II, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra se lee:

"INCIDENTE DE INCONFORMIDAD. AUNQUE SE CONSIDERE FUNDADO, NO DEBE APLICARSE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN, SINO REVOCARSE EL AUTO IMPUGNADO PARA EL EFECTO DE QUE SE REQUIERA EL CUMPLIMIENTO, EXCEPTO CUANDO HAYA INTENCIÓN DE EVADIR O BURLAR ÉSTE.- El incidente de inconformidad previsto por el tercer párrafo del artículo 105 de la Ley de Amparo, a diferencia del de inejecución de sentencia, no tiene como presupuesto evidente la abstención o contumacia de la autoridad responsable para dar cumplimiento a la sentencia, ya que esa inconformidad parte del hecho de que existe, formalmente, una determinación del Juez o de la autoridad que haya conocido del juicio, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida. Por esa razón, cuando se consideran fundados los agravios expresados en la inconformidad, no puede tener aplicación inmediata lo dispuesto por la

SUPREMA
JUSTICIA DE
SEGUNDA
SECRETARÍA D



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

117
FORMA A-55

INCONFORMIDAD 65/2007.

fracción XVI del artículo 107 constitucional, pues no se está en presencia de una absoluta abstención de la autoridad para cumplir o de evasivas para llevar al cabo el cumplimiento de la ejecutoria, en virtud de que existe una determinación judicial que reconoce el cumplimiento de ésta. Lo anterior como regla general y sin perjuicio de las facultades que el artículo 107 constitucional otorga a la Suprema Corte, cuando de autos aparece comprobada la intención de evadir o burlar el cumplimiento de la ejecutoria. Salvo estos casos, las autoridades no deben ser sancionadas en caso de resultar fundado el incidente, en vez de ello, lo procedente es revocar la determinación del juzgador y ordenarle proseguir el cabal cumplimiento de la ejecutoria."



Atento al sentido de la presente inconformidad, debe dejarse sin efectos la resolución de dieciocho de enero de dos mil siete, mediante la cual el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito declaró cumplida la ejecutoria de amparo.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. Es fundada la inconformidad a que este toca se refiere.

SEGUNDO. Devuélvanse los autos del juicio de garantías 181/2005-I, al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San

Luis Potosí, para los efectos precisados en el último considerando de la presente resolución; y al Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, el toca del amparo en revisión 379/2005 y el expediente relativo al incidente de inejecución 13/2005.

TERCERO. Se deja sin efectos la resolución de dieciocho de enero de dos mil siete, dictada en el expediente relativo al incidente de inejecución 13/2005, mediante la cual el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito declaró cumplida la ejecutoria de amparo.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de tres votos de los señores Ministros Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José Fernando Franco González Salas. La señora Ministra Presidenta Margarita Beatriz Luna Ramos votó en contra.- Estuvo ausente el señor Ministro Genaro David Góngora Pimentel, por comisión oficial.

SECRETARÍA
JURÍDICA
SECCIÓN
SECRETARÍA

Firman la Ministra Presidenta y el Ministro Ponente, con el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.

MINISTRA PRESIDENTA
MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS



INCONFORMIDAD 65/2007.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

MINISTRO PONENTE

MARIANO AZUELA GÜITRÓN

SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. MARIO EDUARDO PLATA ÁLVAREZ

ENCIA


Esta hoja corresponde a la Inconformidad 65/2007.- Quejosa: Elena Trejo Saucedo y Otros, que se falló el día treinta y uno de octubre de dos mil siete, en el sentido siguiente: "**Primero.**- Es fundada la inconformidad a que este toca se refiere.- **Segundo.**- Devuélvanse los autos del juicio de garantías 181/2005-1, al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, para los efectos precisados en el último considerando de la presente resolución; y al Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, el toca del amparo en revisión 379/2005 y el expediente relativo al incidente de inejecución 13/2005.- **Tercero.**- Se deja sin efectos la resolución de dieciocho de enero de dos mil siete, dictada en el expediente relativo al incidente de inejecución 13/2005, mediante la cual el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito declaró cumplida la ejecutoria de amparo". **Conste.**

El Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace constar que, en cumplimiento al artículo 191 de la Ley de Amparo, al terminar las labores de este día, se fijó, en el lugar destinado para las notificaciones, una lista de los asuntos tratados en la audiencia de esta Sala celebrada el día de hoy, en la que se incluye este expediente (o toca)
Ine. 65/07
México, D. F. 31 de octubre de 2007

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SALA

En 09 NOV. 2007 y Por medio de lista se
notificó la resolución anterior a las partes. Conste. *g*

SIENDO LAS CATORCE HORAS DE LA FECHA ANTES INDICADA
Y EN VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO LOS INTERESADOS
A OIR NOTIFICACIONES SE TIENE POR HECHA DICHA NOTIFICACION
POR MEDIO DE LISTA. DOY FE. *g*


SUPREMA
JUSTICIA DE
SEGUNDA
SECRETARIA DE